

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha tres, cuatro, cinco, seis y nueve de junio de dos veinticinco, ante esta Sala del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en causa RIT N° 75-2025 y RUC N°2100264473-5, seguida en contra del acusado **CARLOS EDUARDO PONCE VASQUEZ**, chileno, cédula nacional de identidad N°13.482.444-1, soltero, trabajador de faenas de la construcción, nacido en Santiago el 02 de enero de 1976, de 49 años, domiciliado en Pasaje Ucayali N° 2461. Departamento B-21, Población Cousiño Macul, comuna de Peñalolén, representado por el abogado Defensor Penal Público, don Pablo Rubio, cuya completa individualización y forma de notificación se encuentran registradas en la causa.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público representado por el señor Ernesto Navarro Zamora, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con domicilio y forma de notificación registrada en el Tribunal.

SEGUNDO: Que la acusación fiscal, se funda en los siguientes hechos: “Que desde un tiempo indeterminado, pero a lo menos desde el mes de septiembre del 2020 y hasta las detenciones de los integrantes de esta organización, ocurridas el 17 de marzo del año 2022 y el 23 de noviembre del año 2023, el acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, actualmente en prisión preventiva; junto a los condenados, su pareja Tihare Del Sol Espinoza Rivera; Omar Benito Pérez Garrido; Ariel Andres Reyes Novoa; Antonia Marcela Vasquez Merino; Carlos Manuel Gutierrez Muñoz; Agata Aracely Espinoza Valenzuela; Sebastián Rodolfo Muñoz Rivera y Marjorie Katherine Perez Chatterton, fueron parte de una agrupación criminal, dedicada al delito de Tráfico de drogas, principalmente de cocaína base y cannabis sativa, la que el acusado adquiría, acopiaba, dosificaba y vendía,

distribuyendo estas sustancias entre receptores intermedios y finales de la región Metropolitana, especialmente en la comuna de Peñalolén, manteniendo, el acusado armas de fuego y municiones, disponibles con la finalidad de asegurar el éxito de sus operaciones de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Para la materialización de las actividades ilícitas, se distribuyeron funciones entre sus integrantes, correspondiendo la coordinación, liderazgo y control al acusado CARLOS PONCE VASQUEZ, quien tomaba las decisiones estratégicas, en lo que respecta al acopio, abultamiento y venta a destinatarios intermedios, además de los lugares de venta a consumidores finales, siendo en definitiva al acusado Carlos Ponce Vasquez, a quien rendían cuenta los vendedores.

Asimismo el acusado coordinó la preparación, distribución, acopio, traslado, entrega, venta y cobros de dinero, producto de la comercialización de las sustancias ilícitas, en especial de cocaína base y cannabis sativa, utilizando como medio de transporte el automóvil marca Nissan, modelo X-Trail, año 2020, PPU PHVS-37, de propiedad de su conviviente y compañera de delito, la condenada TIHARE ESPINOZA RIVERA, respecto del cual se decretó el comiso como parte de la condena por el delito de lavado de activos.

Para el desarrollo de sus actividades de acopio, dosificación venta de droga y guarda de armas de fuego, utilizó los domicilios ubicados en Calle 114 N°1045, Población Villa Lo Arrieta I; y Calle 83 N° 1472, Población la Faena, ambos inmuebles ubicados en la comuna de Peñalolén, además del inmueble ubicado en Avenida Tobalaba N°5793; Torre B-1, departamento 102-B de la comuna de La Florida, lugar de residencia del acusado junto con su conviviente Tihare Espinoza.

HECHO N° 1

El día 18 de septiembre del año 2020, siendo aproximadamente las 20:00 horas, el acusado Carlos Ponce, llegó hasta el inmueble ubicado en calle Trece N°1365, lugar donde se encontraba la víctima Patricio Soto Acuña, al cual, el

acusado con ánimo de ocasionarle la muerte y premunido de dos armas de fuego, le dispara en cuatro oportunidades, dándole tres proyectiles en la espalda de la víctima, uno en la región dorsal derecha, otro en el antebrazo y, también en la zona axilar derecha, los que de no mediar ayuda médica oportuna, le hubiesen ocasionado la muerte.

HECHO N°2

Con fecha 17 de marzo del 2022, a las 10:15 horas; en virtud de la ejecución de órdenes de entrada y registro e incautación, emanadas del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, personal del Departamento Microtráfico Cero de la Policía de Investigaciones, en forma simultánea, ingresó a los domicilios señalados, encontrando en:

Calle 83 N° 1472, Población la Faena, comuna de Peñalolén:

Al ingreso de este inmueble, funcionarios policiales encontraron al acusado Carlos Ponce Vasquez, blanco principal de esta investigación en un dormitorio donde pernoctaba, al registro de esta dependencia, sobre un mueble tipo cómoda se encontró una bolsa de nylon que en su interior contenía 279 papeles cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso de 55.39 gramos en el mismo lugar una bolsa con cannabis sativa a granel con un peso de 30.97 gramos, más una balanza digital gramera y un teléfono celular.

Dentro de una dependencia destinada a baño, bajo una baldosa existía un forado en el cual se encontró; un revolver marca Galand& Sommerville, sin número de serie, calibre 12 mm; un arma de fuego tipo derringer, de dos cañones marca Davius Industries, modelo D-22 calibre .22 LR número de serie 543253 con dos cartuchos en su interior; un revolver Smith & Wesson con cinco cartuchos, calibre .38 número de serie 329764; un revolver colt con 6 cartuchos .38 spl número de serie 9121003; además en el mismo lugar se encontró gran cantidad de municiones, estas son. 100 municiones 9 mm; 50 munición calibre .32 auto; 50 cartuchos

balísticos de diferentes marcas calibre .22 LR; 17 cartuchos balísticos marca CBC calibre .38 corto; 10 cartuchos balísticos calibre .38 SPL; 1 cartucho balístico calibre 10 mm; 4 municiones .44 win; 1 cartucho balístico .40 mm, 1 cartucho balístico .38 auto.

En el mismo baño en el costado poniente debajo de una baldosa, había también un forado, donde la Policía de Investigaciones halló, una bolsa negra (tipo basura) que en su interior contenía, 7 bolsas de nylon transparente con 723,35 gramos de cannabis sativa granel; una bolsa negra de las mismas características que contenía un paquete rectangular enguinchado con cinta de embalaje verde con cannabis sativa con un peso de 1059.84 gramos. Había también tres bolsas negras, de las mismas características que las bolsas anteriores que contenían, 10 bolsas de nylon que en total tenían 2478 papeles cuadriculados contenedores de pasta base de cocaína con un peso de 525.77 gramos; En la otra bolsa, 11 bolsas de nylon contenedoras de cocaína base dosificada en 2755 envoltorios de papel cuadriculados con un peso de 529.11 gramos, y 10 bolsas de nylon con 2507 papeles cuadriculados con cocaína base con un peso de 516.77 gramos. Además, había una bolsa negra de las mismas características que contenía 4589 papeles cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso de 914.42 gramos.

Total, de la cocaína base incautada 2.541,46 gramos que estaban dosificados en 12.608 papeles cuadriculados.

Calle 114 N°1045, Población Villa Lo Arrieta I:

En este inmueble, que el acusado Carlos Ponce, junto con su conviviente la condenada Tihare Espinoza utilizaban, como lugar de venta de droga, teniendo como fachada un local de comida rápida cuyo nombre de fantasía es “El Pirata Cojo”, y encomendando la venta de droga de consumidores finales a terceras personas, todas condenadas en esta causa.

El mismo día, a las 10:15 horas, funcionarios policiales llegan al lugar, en el frontis del local comercial, efectuando la venta de droga, se encontraban los condenados Antonia Vásquez Meriño y Omar Pérez Garrido, quienes al ser registrados se le encontró a Omar Pérez entre sus vestimentas 22 papeles cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso de 5.58 gramos, 3 pastillas de clonazepam y un envoltorio de cannabis sativa con un peso de 2.02 gramos además de 166 mil pesos producto de la venta de droga, a Antonia Vásquez quien estaba en el mismo lugar, al registro de sus vestimentas se le encontró 69 envoltorios de papel cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína con un peso de 15.37 gramos y la suma de 14.410 pesos producto de la venta de droga; en el mismo instante funcionarios policiales ven a la condenada Ágata Espinoza Valenzuela arrojar por una ventana dos bolsas con cannabis sativa a granel la cual pesó 213.45 gramos.

Al ingreso del inmueble en el lugar destinado a baños, en el entretecho se encontraron 865 papeles cuadriculados contenedores de pasta base con un peso de 181.21 gramos, cuatro tiros calibre 12; 22 bolsas de mediano tamaño contenedoras de cocaína base con un peso de 45.81 gramos, una bolsa con café a granel con un peso de 961.97 gramos y 102.53 gramos de cannabis sativa a granel.

Siguiendo con el registro en el dormitorio, donde se encontraba el condenado Carlos Gutiérrez Muñoz, al momento de la irrupción se le encontró 78.22 gramos de cannabis sativa a granel, elementos comúnmente utilizados para la dosificación de la droga, como rollos de bolsas de nylon pequeñas y una balanza digital además de la suma de \$141.000 pesos, en el dormitorio de otra vendedora al menudeo dirigida por Carlos Ponce de nombre Marjorie Pérez, se encontró dentro de un bolso rojo la suma de 511.850 pesos, en una caja de seguridad la policía halló \$98.000 pesos y 499.49 gramos de cannabis sativa granel.

Avda. Tobalaba N°5793; Torre B-1, depto. 102-B de la comuna de La Florida:

En este inmueble, residencia habitual del acusado Carlos Ponce junto con su conviviente Tihare Espinoza, se encontraron 185 mil pesos y documentación relativa adquisición y forma de pago del local de comida rápida irrumpido.

LAVADO DE ACTIVOS

Producto de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas el acusado ha adquirido diversos bienes, entre ellos inmuebles y vehículos, que son utilizados por el acusado y su conviviente, inscritos a nombre de ésta que, en conocimiento de la procedencia de los dineros, facilita su identidad para este efecto, materializando de esta forma la figura de Testaferro, siendo condenada por este hecho.

En este sentido, el líder de esta agrupación criminal, con miras a ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos por el tráfico de drogas, en el mes de septiembre del 2020 adquirió el vehículo marca Nissan modelo X-Trail PPU PHVS-37, en la suma de \$ 21.990.000 pesos, utilizando como testaferro a su conviviente la condenada Tihare del Sol Espinoza Rivera, quien tenía pleno conocimiento del origen ilícito de los bienes y de las actividades asociadas al delito de tráfico de drogas.

En el mismo sentido la condenada Tihare Espinoza Rivera y el acusado Carlos Ponce, con el objeto de disimular y ocultar la adquisición y uso de inmuebles, utilizando como testaferros a los anteriores dueños de las propiedades, de esa forma, se mantenía la propiedad registral de los mismos, pese a que disponían patrimonialmente de ellos en los hechos y se comportaban a su respecto como señores y dueños utilizándolos de manera funcional en beneficio de la actividad ilícita que realizaban. , es así como adquirieron los siguientes inmuebles:

1. Calle 114 N° 1045, Población Lo Arrieta, Comuna de Peñalolén:

El inmueble se encuentra inscrito a fojas 41.775, número 61.125 del año 2021 a nombre de la Sucesión Hereditaria quedada al fallecimiento de doña Blanca Silvia

Torres Castillo, sucesión compuesta por sus hijos Luis Fernando Araya Torres, Ricardo Placido Araya Torres y Heraldo Alejandro Meneses Torres.

Con fecha 15 de septiembre de 2021, don Heraldo Alejandro Meneses Torres realizó cesión de derechos hereditarios que le corresponden en el inmueble de Calle 114 n° 1045, Población Lo Arrieta, Comuna de Peñalolén a doña Tihare Espinoza Rivera, mediante escritura pública en la notaria de doña Dora Silva Letelier, bajo el repertorio número 2718-2021. El precio de la cesión es de \$ 7.000.000.- pagados al contado y efectivo por doña Tihare Espinoza Rivera.

Con fecha 14 de octubre de 2021, don Luis Fernando Araya Torres realizó cesión de los derechos hereditarios que le corresponden en el inmueble de Calle 114 N° 1045, Población Lo Arrieta, Comuna de Peñalolén a don Carlos Ponce Vasquez, mediante escritura pública en la notaria de doña Dora Silva Letelier, bajo el repertorio número 3051-2021. El precio de la cesión es de \$ 7.000.000.- pagados al contado y efectivo por don Carlos Ponce. Cabe señalar que en este inmueble se encuentra domiciliada la empresa “Servicios de comida rápida Tihare del Sol Espinoza E.I.R.L”, más conocida con su nombre de fantasía “La Picada del Pirata Cojo” fachada del negocio ilícito de venta de drogas, lo que se manifestó en la irrupción a este inmueble, donde se encontró gran cantidad de droga y sujetos que se dedicaban a la venta de droga en el lugar.

2. Guacolda 64, LOTE 806, sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar.

El inmueble se encuentra inscrito a fojas 3.611, número 4238 del año 2021 a nombre de la Sucesión Hereditaria quedada al fallecimiento de doña Blanca Silvia Torres Castillo, sucesión compuesta por sus hijos Luis Fernando Araya Torres, Ricardo Placido Araya Torres y Heraldo Alejandro Meneses Torres.

Con fecha 15 de septiembre de 2021, Heraldo Alejandro Meneses Torres realizó cesión de derechos hereditarios que le corresponden en el inmueble

individualizado como lote 806 de la población nueva aurora en Viña del Mar a doña Tihare Espinoza Rivera, mediante escritura pública en la notaria de doña Dora Silva Letelier, bajo el repertorio número 2719-2021. El precio de la cesión es de \$ 2.000.000.- pagados al contado y efectivo por doña Tihare Espinoza.

Con fecha 14 de octubre de 2021, don Luis Fernando Araya Torres realizó cesión de los derechos hereditarios que le corresponden en el inmueble individualizado como lote 806 de la población nueva aurora en Viña del Mar a don Carlos Ponce Vasquez, mediante escritura pública en la notaria de doña Dora Silva Letelier, bajo el repertorio número 3052-2021. El precio de la cesión es de \$2.000.000.- pagado al contado y efectivo por don Carlos Ponce.”

A juicio de la fiscalía los hechos descritos son constitutivos de los delitos de homicidio frustrado previsto en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, tráfico ilícito de drogas artículo 3 y 1 de la ley 20.000, tenencia ilegal de arma de fuego artículo 2, letra b de la ley 17.798, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida del artículo 3 de la ley 17.798, tenencia ilegal de municiones artículo 2, letra c de la ley 17.798 y lavado de activos artículo 27, letras A y B de la ley 19.913, respectivamente, los que se encontrarían en grado de desarrollo consumado, correspondiéndole al acusado en todos ellos participación en calidad de autor.

En concepto del persecutor, no concurren respecto del acusado circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

El Ministerio Público requiere que se condene al acusado CARLOS EDUARDO PONCE VÁSQUEZ a la PENA DE 10 AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado medio y multa de 100 UTM por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS delito previsto y sancionados en los artículo 1 y 3 de la Ley 20.000; a la pena de 7 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación al artículo 2 letra b) y 12 de la Ley

17.798, a la pena de 7 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, previsto y sancionado en el artículo 13 en relación al artículo 3 letra f) de la Ley 17.798, a la pena de 3 AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO por el delito de TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES, previsto y sancionado en el artículo 9 en relación al artículo 2 letra c) de la Ley 17.798, a la pena DE 10 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO Y MULTA DE 300 UTM por el delito de LAVADO DE ACTIVOS delito previsto y sancionados en el artículo 27 de la Ley 19.913, a la pena de 10 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO por el delito de HOMICIDIO, previsto y sancionado en el artículo 391 n°2 del Código Penal.

COMISO: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal y 45 de la Ley 20.000 solicito a S.S. se decrete el COMISO DE TODA LA EVIDENCIA MATERIAL INCAUTADA Y PARTICULARMENTE LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN AL ACUSADO EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES:

1. Inmueble ubicado en Calle 114 N°1045, Población Lo Arrieta, comuna de Peñalolén, inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 41.775 N°61.124 del año 2021
2. Inmueble ubicado en calle/ Pasaje Guacolda N° 64, LOTE 806, sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar, inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar a fojas 3.611 N°4.238 del año 2021.

TERCERO: Que, en su **alegato de apertura**, el señor Fiscal expuso que durante el desarrollo del juicio se acreditaría que el acusado Carlos Ponce desarrolló una actividad criminal sistemática y organizada entre los años 2020 y 2022, configurando múltiples delitos conexos.

Respecto al delito de homicidio frustrado, sostuvo que el día 18 de septiembre de 2020, producto de un conflicto relacionado con el tráfico de drogas, el acusado se dirigió al domicilio de la víctima y le efectuó cuatro disparos con la clara intención de causarle la muerte, objetivo que no se materializó por circunstancias ajenas a su voluntad. Señaló que comparecerían testigos presenciales del hecho, funcionarios policiales y carabineros que concurrieron al lugar, precisando que si bien Patricio Soto no podría comparecer al juicio, existían otros testigos presenciales que conocían perfectamente la dinámica de los hechos.

En relación al delito de tráfico de estupefacientes, el representante del Ministerio Público indicó que durante el año 2022 la Fiscalía investigó una creciente actividad ilícita en el local denominado "El Pirata Cojo", lugar donde se recibieron cerca de 16 denuncias tanto del Programa Denuncia Seguro como municipales, las que daban cuenta de que allí había un sujeto llamado Carlos Ponce que se dedicaba a la venta de drogas, proporcionando alojamiento por turnos a diversas personas y utilizando el local como fachada para actividades ilícitas. Agregó que en todos los dormitorios y lugares comunes se encontró droga a granel, existiendo prueba material audiovisual que mostraba el flujo hacia el lugar y la actividad tanto de los brazos operativos como del propio acusado, quien fue encontrado durmiendo en el lugar con droga a su alrededor.

Respecto al delito de tenencia ilegal de armas y municiones, el Fiscal expuso que en el baño de uno de los domicilios allanados, fueron halladas 4 armas de fuego junto a 12.600 dosis de droga, lugar donde se acopiaba la misma, precisando que la prueba pericial daría cuenta de que todas las armas estaban aptas para el disparo. Indicó, además, que con autorización del 13° Juzgado de Garantía de Santiago se logró instalar un GPS en la camioneta Nissan Xtrail del acusado, lo que permitió conocer la trayectoria que se realizaba para el tráfico de drogas.

Finalmente, en cuanto al delito de lavado de activos, el representante del Ministerio Público sostuvo que el acusado Carlos Ponce, junto a doña Thiare Espinoza adquirió el local "El Pirata Cojo" mediante la compra de derechos hereditarios a dos de los herederos de dicha propiedad, ocultando de esta forma su verdadero dominio sobre el inmueble para llevar a cabo el lavado de activos.

El Fiscal concluyó señalando que cuando Ponce fue detenido se procedió también a la detención de otras 8 personas vinculadas a la organización criminal, las cuales ya habían sido condenadas, solicitando, finalmente que, una vez rendida la prueba, se dictara sentencia condenatoria por los delitos de homicidio frustrado, tráfico de estupefacientes, tenencia ilegal de armas y municiones, y lavado de activos.

Por su parte, **la defensa**, en sus alegatos de apertura, solicitó la absolución de su representado respecto de todos los delitos imputados, por falta de participación en los hechos investigados.

En relación al delito de homicidio frustrado, la defensa sostuvo que su representado no tuvo participación alguna en la acción dirigida en contra de Patricio Soto, anunciando que el imputado declararía en el juicio para explicar su versión de los hechos.

Respecto al delito de tráfico de estupefacientes, la defensa argumentó que la verdadera responsable de la actividad ilícita era doña Thiare, quien era la dueña del negocio y continuó desarrollando estas actividades pese a que el acusado se encontraba privado de libertad durante varios meses. Precisó que cuando el acusado fue detenido en 2023, Thiare siguió realizando la actividad de tráfico hasta el 23 de noviembre de 2023, fecha en que fue detenida, pese a que había terminado la relación sentimental con el imputado.

La defensa destacó que no existían grabaciones de llamados telefónicos del acusado que dieran cuenta de la realización de los ilícitos que se le imputan, y que su

representado explicaría las razones por las cuales se encontraba en el lugar de los hechos el día de su detención, ocurrida el 18 de marzo de 2023.

En cuanto al delito de tenencia ilegal de armas y municiones, la defensa también solicitó la absolución de su representado por falta de participación en los hechos imputados. Finalmente, respecto al delito de lavado de activos, el abogado defensor argumentó que no le correspondía participación alguna al señor Ponce Vásquez en dicho ilícito, agregando que tampoco se configuraban los elementos típicos del delito de lavado de activos. En consecuencia, la defensa concluyó solicitando la total absolución de Carlos Ponce Vásquez por los delitos imputados en su contra.

CUARTO: Que el acusado renunció a su derecho a guardar silencio y declaró al inicio del juicio, ocasión en la que sostuvo que el 17 de marzo de 2022, cuando fue detenido, se encontraba trabajando en esa casa realizando labores de construcción, específicamente haciendo una reja, un radier y reparaciones de techos, agregando que como trabajaba a trato, se quedaba laborando hasta tarde. Indicó que fue contratado por Scarleth, pero que en esa casa siempre habían vendido droga y que hasta el día de hoy siguen vendiendo, precisando que no se le podía culpar porque eso no era suyo. Respecto a Thiare, declaró que era su ex pareja y que se separaron en 2019, manteniendo únicamente vínculo por la hija en común.

En relación al homicidio frustrado, negó haber tenido conflicto con la víctima, señalando que incluso antes andaba robando con el padre de éste y que no tenía rencillas con ellos. Sobre el lavado de activos, reconoció que estaba comprando los derechos de una propiedad, pero que la persona se murió antes de poder terminar de pagársela y transferir los derechos.

Al ser consultado por el Fiscal, el acusado precisó que trabajaba para el padre de la víctima haciendo rejas y radier, y que en el pasaje 114 había un local de comida de su ex pareja llamado "El Pirata Cojo", pero que no vivía en ese lugar desde 2019

ni tenía contacto alguno con ella. Explicó que frecuentaba ese lugar únicamente para ir a dejar a su hija al colegio.

Agregó, respecto al domicilio donde fue detenido, que habían reconstruido esa casa de manera completa junto a varios trabajadores más. Reconoció que arrancaba de la policía porque quedó debiendo 17 años de la libertad condicional, pero negó estar traficando en el lugar.

Al ser interrogado por su abogado defensor, el acusado declaró que su hija tiene 9 años y cumplirá 10 el 5 de junio de 2025, ratificando que terminó su relación con Thiare en el año 2019, después de lo cual ambos tuvieron otras parejas. Indicó que vivía con su madre en pasaje Ucayali y que iba de visita a ver a su hija, utilizando a veces la camioneta Nissan de Thiare para llevarla al colegio.

Reconoció haber estado preso muchas veces, recuperando su libertad a fines de 2016, volviendo a delinquir y recuperando nuevamente su libertad a fines de 2018.

Declaró que vio a Thiare vendiendo papelillos de pasta base en el local, donde también vendían completos y otras cosas, precisando que ese local era de Thiare y que él trabajaba bien sin necesitar de esas actividades ilícitas.

Respecto al trabajo que realizaba en el domicilio de calle 83, indicó que le cobró a doña Scarleth \$2.000.000, precisando que trabajaba sin iniciación de actividades porque lo estaban buscando por incumplir la libertad condicional.

Sobre la compra de derechos hereditarios, declaró que se los estaba comprando a don Luis Fernando Araya, pagándoselos de a poco con lo que recibía de su trabajo, pero que esa persona falleció antes de completar la transacción y el traspaso legal.

Respecto al homicidio frustrado, reiteró que nunca tuvo problemas con Patricio Soto, que andaba robando con el padre de éste, y que el 18 de septiembre de 2020 no tuvo ningún problema con la víctima ni la vio ese día.

Finalmente, declaró que cuando fue detenido, Thiare lo visitó varias veces en la cárcel para traerle a su hija, pero que no hablaron del negocio porque ella ya lo había cerrado, agregando que actualmente no tiene contacto con Thiare hace aproximadamente un año y medio, y que si bien conoce a las personas señaladas en la acusación, nunca les dio órdenes ni instrucciones.

QUINTO: Que, los intervinientes en la audiencia de preparación de juicio oral no acordaron convención probatoria alguna.

SEXTO: Que, el acusador fiscal, para acreditar los hechos imputados, rindió la siguiente prueba:

I.- Testimonial: Constituida por la declaración de los siguientes deponentes, cuyos testimonios se encuentran íntegramente en el registro de audio, todos los cuales fueron legalmente juramentados.

1.- **Ayline Ulloa Garrido**, chilena, cédula nacional de identidad N°20.254.714-1, 25 años, casada, funcionaria pública, con domicilio reservado.

2.- **Yeny Andrea Acuña Torres**, chilena, cédula nacional de identidad N°15.364.597-3, 44años, soltera, reponedora de supermercado, con domicilio reservado.

3.- **Jose Ricardo Rebolledo Salazar**, chileno, cédula nacional de identidad 16.357.673-2, funcionario público, con domicilio en Williams Rebolledo 1717, comuna de Ñuñoa.

4.- **Felipe André Vásquez Guerrero**, chileno, cédula nacional de identidad N° 18.549.892-1, funcionario público, con domicilio en Williams Rebolledo 1717, comuna de Ñuñoa.

5.- **Magdalena Sofía Ríos Barría**, chilena, cédula nacional de identidad N° 19.542.937-5, funcionaria pública, domiciliada en Williams Rebolledo 1717, comuna de Ñuñoa.

6.- **Marcel Parra Sepúlveda**, chileno, cédula nacional de identidad N°18.794.348-5, funcionario público, domiciliado en El Lago N° 5720, comuna de Peñalolén.

7.- **Maria Alarcón Espinoza**, chilena, cédula nacional de identidad N°20.321.184-8, funcionaria pública, domiciliada en El Lago N° 5720, comuna de Peñalolén.

8.- **Daniel Esteban Díaz Olivos**, chileno, cédula nacional de identidad N°16.662.984-5, funcionario público, domiciliado en El Lago n° 5720, comuna de Peñalolén.

9.- **Ignacio Alfonso Sandoval Álvarez**, chileno, cédula nacional de identidad N°18.773.912-8; funcionario público, domiciliado en El Lago n° 5720, comuna de Peñalolén.

10.- **Yerhal Ignacio Acuña Zapata**, chileno, cédula nacional de identidad N°19.988.629-0; funcionario público, domiciliado en Antofagasta.

11.- **Jairo Giovanni Flores Flores**, chileno, cédula nacional de identidad N°20.001.861-3, funcionario público, con domicilio en El Lago N°5720, comuna de Peñalolén.

II. Pericial: Consistente en la declaración de los siguientes peritos, cuyas declaraciones se encuentran íntegramente en registro de audio, todos los cuales fueron legalmente juramentados.

1.- **Roberto Jimenez Silva**, chileno, cédula nacional de identidad N° 10.514.184-K, perito armero artificiero, con domicilio en La Oración N°1271, comuna de Pudahuel.

III.- Documental:

1.- Acta de recepción de droga incautada N°2466-2021, referente a N.U.E 6206745, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

2.- Reservado N°5381-2021 de fecha 7 de abril del 2021, respecto de la droga incautada NUE 6206745.

3.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6206745, elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Basilio Chichahual Caniupán, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

4.- Informe de efectos y peligrosidad de la cocaína base, elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Basilio Chichahual Caniupán respecto de la droga incautada N.U.E 6206745, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

5.- Acta de recepción de droga incautada N°180 de fecha 18 de marzo, referente a N.U.E 6329792, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

6.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329792 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

7.- Informe de efectos y peligrosidad de la Cannabis elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez respecto de la droga incautada N.U.E 6329792, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

8.- Acta de recepción de droga incautada N°181 de fecha 18 de marzo, referente a N.U.E 6329794, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

9.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329794 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

10.- Informe de peligrosidad de la cannabis elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez respecto de la droga incautada N.U.E 6329794, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

11.- Acta de recepción de droga incautada N°182 de fecha 18 de marzo, referente a N.U.E 6329797, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

12.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329797 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

13.- Informe de peligrosidad de la Cannabis elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez respecto de la droga incautada N.U.E 6329797, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

14.- Acta de recepción de droga incautada N°185 de fecha 18 de marzo, referente a N.U.E 6329810, del Servicio de Salud Metropolitano Oriente

15.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329810 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

16.- Informe de peligrosidad de la Cannabis elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez respecto de la droga incautada N.U.E 6329810, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

17.- Acta de recepción de droga incautada N°1899-2022 de fecha 18 de marzo, referente a N.U.E 6329793, N.U.E 6329803, N.U.E 6329809, N.U.E 6329811,

N.U.E 6329805, N.U.E 6329825, N.U.E 6329828 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente

18.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329793, elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

19.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329803, elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

20.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329809 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

21.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329811, elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal

22.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329805 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal

23.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329825 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

24.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329828 elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

25.- Informe de peligrosidad de la cocaína base elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa respecto de la droga incautada N.U.E 6329793, N.U.E 6329803, N.U.E 6329809, N.U.E 6329811, N.U.E 6329805, N.U.E 6329825, N.U.E 6329828, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

26.- Informe de peligrosidad de la Cafeína elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don René Rocha Barrasa respecto de la droga incautada N.U.E 6329793, N.U.E 6329803, N.U.E 6329809, N.U.E 6329811, N.U.E 6329805, N.U.E 6329825, N.U.E 6329828, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

27.- Acta de recepción de droga incautada N°190 de fecha 18 de marzo, referente a N.U.E 6329824 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

28.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329824, elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

29.- Informe de peligrosidad de la cannabis elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez respecto de la droga incautada N.U.E 6329824, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

30.- Acta de recepción de droga incautada N°191 de fecha 18 de marzo, referente a N.U.E 6329827 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente

31.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329827, elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

32.- Informe de peligrosidad de la Cannabis elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Fernanda Astudillo Domínguez respecto de la droga incautada N.U.E 6329827, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

33.- Acta de recepción de droga incautada N°2927-2021, referente a N.U.E 6206756 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

34.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6206756, RESERVADO N°6397-2021, código de muestra 6397-2021-M1-1, elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Basilio Chicahual Caniupán, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

35.- Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Cocaína elaborado por la Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Basilio Chicahual Caniupán respecto de la droga incautada N.U.E 6206756, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

65. Acta de recepción de droga incautada N°3187-2021, referente a N.U.E 6206777 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

36.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6206777, N°7064-2021, código de muestra 7064-2021-M1-1, elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Basilio Chicahual Caniupán, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

37.- Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Cocaína elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud

Metropolitano Oriente, don Basilio Chicahual Caniupán respecto de la droga incautada N.U.E 6206777, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

38.- Acta de recepción de droga incautada N°3188-2021, referente a N.U.E 6206775 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente

39.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6206775, N°7065-2021, código de muestra 7065-2021-M1-1, elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Basilio Chicahual Caniupán, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

40.- Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Cocaína elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, don Basilio Chicahual Caniupán respecto de la droga incautada N.U.E 6206775, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

41.- Acta de recepción de droga incautada N°4348-2021, referente a N.U.E 6329482 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

42.- Informe pericial protocolo de análisis de droga N.U.E 6329482, código de muestra 9395-2021-M1-1, elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Sonia Rojas Rondón, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

43.- Informe de efectos y peligrosidad para la salud pública de la Cocaína elaborado por el Perito Bioquímico del Instituto del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doña Sonia Rojas Rondón respecto de la droga incautada N.U.E 6329482, incorporado de conformidad al artículo 315 del Código Procesal Penal.

44.- Dato de Atención de Urgencia N°43 del Consultorio SAPU La faena de fecha 18 de septiembre del 2020: herida penetrante en tórax por arma de fuego.

45.- Solicitud de interconsulta o derivación, del Servicio de salud metropolitano oriente, SAPU La faena, de fecha 19 de septiembre del 2020.

46.- Dato de Atención de urgencia N° u0000728669 del Hospital Luis Tizné, de fecha 18 de septiembre del 2020.

47.- Informe N° 6442/1902/2022, respecto del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, emitido por la Dirección General de Movilización (DGMN) con fecha 11 de mayo del año 2022.

48.- Certificación de Copia de escritura pública de cesión de derechos hereditarios, mandatos y protocolización celebrada entre Luis Fernando Araya Torres y Carlos Eduardo Ponce Vasquez, con fecha 14 de octubre del año 2021, en la notaria de Santiago de doña Dora Del Carmen Silva Letelier, bajo el repertorio N° 3051-2021.

49.- Copia de escritura pública de cesión de derechos hereditarios, mandatos y protocolización respecto del inmueble ubicado en calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén, celebrada entre Luis Fernando Araya Torres y Carlos Eduardo Ponce Vasquez, con fecha 14 de octubre del año 2021, en la notaria de Santiago de doña Dora Del Carmen Silva Letelier, bajo el repertorio N° 3051-2021.

50.- Certificación de Copia de escritura pública de cesión de derechos hereditarios, mandatos y protocolización celebrada entre Heraldo Alejandro Meneses Torres y Tihare del Sol Espinoza Rivera, con fecha 15 de septiembre del año 2021, en la notaria de Santiago de doña Dora Del Carmen Silva Letelier, bajo el repertorio N° 2781-2021.

51.- Copia de escritura pública de cesión de derechos hereditarios, mandatos y protocolización celebrada entre Heraldo Alejandro Meneses Torres y Tihare del Sol Espinoza Rivera, con fecha 15 de septiembre del año 2021, respecto del inmueble ubicado en calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén, celebrada en la notaria de Santiago de doña Dora Del Carmen Silva Letelier, bajo el repertorio N° 2781-2021.

52.- Copia de inscripción con vigencia respecto del inmueble ubicado en calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén, que rola a fojas 41.775, número 61.125 del año 2021, Rol de avalúo 5692-12, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

53.- Consulta de antecedentes de bien raíz, respecto del inmueble ubicado en calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén, Rol de avalúo 5692-12, emitido por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 28 de abril del año 2022.

54.- Certificado de avalúo fiscal de la propiedad ubicada en Calle 114 N°1045, comuna de Peñalolén, correspondiente al primer semestre del año 2022, emitido por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 10 de mayo de 2022.

55.- Certificado de inscripción de comiso decretado por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, inscrito a fojas 10.344, número 15.545 del año 2024, respecto de derechos hereditarios sobre el inmueble ubicado en inmueble ubicado en calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

56.- Copia de escritura pública de cesión de derechos hereditarios, mandatos y protocolización celebrada entre Heraldo Alejandro Meneses Torres y Tihare del Sol Espinoza Rivera, respecto del inmueble ubicado en calle Guacolda N° 64 Lote 806 sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar, otorgada con fecha 15 de septiembre del año 2021, en la notaria de Santiago de doña Dora Del Carmen Silva Letelier, bajo el repertorio N° 2.719-2021.

57.- Copia de escritura pública de cesión de derechos hereditarios, mandatos y protocolización celebrada entre Luis Fernando Araya Torres y Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto del inmueble ubicado en calle Guacolda N° 64 Lote 806 sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar, celebrada con fecha 14 de octubre del año 2021, en la notaria de Santiago de doña Dora Del Carmen Silva Letelier, bajo el repertorio N° 3052-2021.

58.- Oficio N° 219/2022 emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, emitido con fecha 18 de marzo del año 2022.

59.- Certificado de avalúo fiscal del inmueble ubicado en Guacolda N° 64, lote 806, sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar, emitido por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 11 de mayo del año 2022.

60.- Consulta de antecedentes de un bien raíz, respecto del inmueble ubicado en Guacolda N° 64, lote 806, sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar, emitido por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 28 de abril del año 2022.

61.- Informe de Acreencias y/o Deudas del acusado Carlos Eduardo Ponce Vásquez, emitido por la Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 28 de abril de 2022.

62.- Sistema de Consulta tributaria Integrada, respecto a características e inicio de actividades del acusado Carlos Eduardo Ponce Vásquez, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

63.- Sistema de Consulta tributaria Integrada, respecto a datos informados como contribuyente del acusado Carlos Eduardo Ponce Vásquez, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

64.- Sistema de Consulta tributaria Integrada, respecto a participación en sociedades del acusado Carlos Eduardo Ponce Vásquez, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

65.- Sistema de Consulta tributaria Integrada, respecto a datos informados como contribuyente del acusado Carlos Eduardo Ponce Vásquez, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

66.- Sistema de Consulta tributaria Integrada, respecto de bienes raíces informados por el acusado Carlos Eduardo Ponce Vásquez, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

67.- Sistema de Consulta tributaria Integrada, respecto a últimos documentos autorizados como contribuyente del acusado Carlos Eduardo Ponce Vásquez, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

68.- Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto de compras de bienes raíces efectuada, emitido por el SII con fecha 23 de marzo del año 2022.

69.- Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto a Declaración de anual de renta (FormulFormulario 22) del año 2021, emitido con fecha 28 de abril del año 2022. Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto a Declaración de anual de renta (Formulario 22) del año 2022, emitido con fecha 28 de abril del año 2022.

70.- Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto a Declaraciones mensuales (Formulario 29) periodo tributario del año 2021, emitido con fecha 28 de abril del año 2022.

71.- Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto a Declaraciones mensuales (Formulario 29) periodo tributario del año 2022, emitido con fecha 28 de abril del año 2022.

72.- Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto a detalles del vector, Declaración Jurada 1887 Anual sobre rentas del artículo 42 N° 1 (sueldos) y retenciones del impuesto único de la ley de la renta, periodo 2021, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

73.- Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto de periodo tributario 2021, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

74.- Sistema de consulta tributaria integrada del acusado Carlos Eduardo Ponce Vasquez, respecto de periodo tributario 2022, emitido por el SII con fecha 28 de abril del año 2022.

IV.- Otros Medios De Prueba:

1.- Set de 3 (tres) fotografías correspondientes del sitio del suceso y evidencia encontrada de los hechos ocurridos el 18 de septiembre del 2020.

2.- Set de 49 (cuarenta y nueve) fotografías contenidas en el Informe de Vigilancia N°02 de fecha 29 de abril de 2021.

3.- Set de 5 (cinco) imágenes contenidas en el Cuadro Gráfico Demostrativo del Anexo 6 del Informe Policial N°1699 correspondientes a la ubicación de Adasme Barros antes de adquirir la droga y la posterior evidencia. De fecha 29 de abril del 2021.

5.- Set de 5 (cinco) imágenes contenidas en el Cuadro Gráfico Demostrativo del Anexo 6 del Informe Policial N°1696 correspondientes a la ubicación de Gaete Cid antes de adquirir la droga y la posterior evidencia de fecha 29 de abril del 2021.

6.- Set de 20 (veinte imágenes) contenidas en el Cuadro Gráfico Demostrativo del Informe Policial N°1175 correspondientes al domicilio del acusado irrumpido, ubicado en Pasaje 83 N°1472, comuna de Peñalolén.

7.- Set de 22 (veintidós) imágenes contenidas en el Cuadro Gráfico Demostrativo del Informe Policial N°1175 correspondientes al domicilio del acusado irrumpido, ubicado en Avenida Tobalaba N°5793, departamento 102-B, comuna de La Florida.

8.- Set de 72 (setenta y dos) imágenes contenidas en el Cuadro Gráfico Demostrativo del Informe Policial N°1175 correspondientes al local comercial de fachada, irrumpido, ubicado en Calle 114 N°1045, comuna de Peñalolén.

9.- Cuarenta y cuatro (44) imágenes contenidas en el informe pericial balístico N°1269/22 de fecha 30 de diciembre del 2022.

10.- 01 (un) DVD-R marca Maxell, de 4.7 GB, que contiene registros visuales de la vigilancia realizada en el inmueble ubicado en calle 114 N°1045, población Villa Lo Arrieta I, comuna de Peñalolén. N.U.E 6206757.

11.- 01 (un) DVD-R marca Maxell, de 4.7 GB, que contiene registros visuales de la vigilancia realizada en el inmueble ubicado en calle 114 N°1045, población Villa Lo Arrieta I, comuna de Peñalolén. N.U.E 6206776.

12.- UN DVD-R, que contiene registros de georreferenciación del vehículo utilizado por el acusado PPU PHVS-37 N.U.E. 6329767.

13.- 01 (una) bolsa de nylon transparente vacía, contenedora de Cannabis Sativa, incautada mediante N.U.E 6329824.

14.- 01 (un) envoltorio de papel blanco cuadriculado vacía, contendora de cocaína base incautada bajo N.U.E 6329825.

15.- 01 (una) bolsa de nylon color negro y 07 (siete) bolsas de nylon transparente, vacías contenedoras de Cannabis Sativa incautada mediante N.U.E 6329827.

16.- 01 (una) bolsa de nylon color negro, vacía y 2.478 (dos mil cuatrocientos setenta y ocho) envoltorios de papel blanco cuadriculado vacíos, contenedores de Cocaína Base, incautada mediante N.U.E 6329828.

17.- 01 (una) bolsa de nylon color negro, vacía y 11 (once) bolsas de nylon transparente, vacíos, 2.755 (dos mil setecientos cincuenta y cinco) envoltorios de papel blanco cuadriculado, vacíos contenedores de Cocaína Base, incautada mediante N.U.E 6329828.

18.- 01 (una) bolsa de nylon color negro, 10 (diez) bolsas de nylon transparente, y 2.507 (dos mil quinientos siete) envoltorios de papel blanco cuadriculado, vacíos que contenían Cocaína Base incautada mediante N.U.E 6329828.

19.- 01 (una) bolsa de nylon color negro vacía y 4.589 (cuatro mil quinientos ochenta y nueve) envoltorios de papel blanco cuadriculado, vacíos contenedores de Cocaína Base, incautada mediante N.U.E. 6329828. (2478 ENVOLTORIOS CONTENDORES DE COCAINA BASE; BOLSA NEGRA CON 11 BOLSAS DE NYLOSN 2555 ENVOLTORIOS; una bolsa de nylon negro con 2507 envoltorios contenedores de sustancia, bolsa con 4589 envoltorios.

20.- 01 (un) Tarjeta Banco Estado Cuenta Rut nro. 87507009 cuyo titular es nombre Héctor Sánchez Rojas incautada mediante N.U.E. 6329815.

21.- 01 (una) Tarjeta Banco Estado Visa Debito nro. 4345591101543167 incautada mediante N.U.E. 6329815.

22. -01 (una) Tarjeta Banco Estado Cuenta Rut nro. 4345591119348088 incautada mediante N.U.E. 6329815.

23.- 01 (una) Tarjeta Banco Estado de Coordinadas nro. 20958246 incautada mediante N.U.E. 6329815.

24.- 01 (una) Tarjeta Santander nro. 5597794107660207 cuyo titular es Tihare Espinoza Rivera incautada mediante N.U.E. 6329815.

25.- 01 (una) Tarjeta Santander de Coordinadas nro. 3886848 incautada mediante N.U.E. 6329815.

26.- 04 (cuatro) tarjetas de Thermas Internacional Santiago de Chile asociadas a Carlos Ponce, Tihare Espinoza, Cataleya Ponce, Paz Donoso respectiva incautada mediante N.U.E. 6329815.

27.- 865 (ochocientos sesenta y cinco) envoltorios de papel cuadriculado blancos, vacíos contenedores de Cocaína Base, incautada mediante N.U.E. 6329809.

SÉPTIMO: Que, a su turno, la defensa se valió de la prueba documental del ente acusador, e incorporó prueba testimonial, consistente en la declaración de:

1.- **Scarlet Alexandra Meza Escudero**, chilena, cédula nacional de identidad N° 18.545.689-7, 32 años, soltera, de oficio reponedora, domiciliada en Calle 36 N° 7044, comuna de Peñalolén.

OCTAVO: Que en sus **alegatos de clausura**, el señor **Fiscal** sostuvo que se había acreditado plenamente el delito de homicidio frustrado ocurrido el 18 de septiembre de 2020 en el frontis del inmueble de calle 13, en contra de la víctima Patricio Soto, a quien el acusado le disparó en, al menos, cuatro oportunidades, ocasionándole heridas de bala en el tórax, axila y espalda. Indicó que declaró la funcionaria Edith Ulloa Garrido, quien concurrió al sitio del suceso y que, según el relato de la madre de la víctima, su hijo fue a comprar droga en la esquina de los pasajes 106 con 107, tuvo un altercado con la gente que vendía droga, y al rato llegó Carlos Ponce y le disparó en cuatro ocasiones.

El representante del Ministerio Público destacó como declaración clave la de doña Jenny Acuña Torres, quien proporcionó el contexto de cómo ocurrieron los hechos, relatando hechos anteriores, coetáneos y posteriores, señalando que conocía a los vendedores de droga porque eran los que tenía Carlos Ponce vendiendo ahí, y que vio a dos metros a Carlos Ponce junto a Ángel cuando le dispararon a su hijo Patricio. El Fiscal argumentó que el dolo que presentaba el acusado era un dolo de matar, citando que Ponce habría señalado "a mí nadie me viene a dar jugo". Agregó que se tomaron fotografías del sitio del suceso y se rescató un casquillo de bala percutida en el lugar, resultando la víctima hospitalizada con lesiones graves consistentes en tres heridas por bala en región dorsal derecha, antebrazo y zona axilar derecha.

Respecto a la investigación posterior, el Fiscal indicó que Magdalena Ríos de la Brigada de Homicidios tomó contacto con la víctima el 16 de octubre de 2020, quien le prestó declaración relatando los hechos violentos vividos el 18 de septiembre, señalando que tenía una adicción a la pasta base que lo hacía ir

recurrentemente al pasaje 106 con 107. Explicó que el temor al acusado hizo que la víctima abandonara la región, saliera de las drogas y buscara un nuevo camino, razón por la cual no se pudo contar con su declaración en la audiencia.

En cuanto al delito de tráfico de estupefacientes, el Fiscal sostuvo que Carlos Ponce ejercía un dominio territorial en la zona de Peñalolén, y que todos los testigos del equipo Microtráfico Cero fueron contestes en señalar que la investigación partió por el homicidio frustrado y por los antecedentes aportados en virtud de un artículo 22 de la Ley 20.000. Indicó que todos los funcionarios señalaron que existían diversas denuncias del Programa denuncia seguro y municipales, determinándose el tráfico en base al agente revelador. Preciso que realizaron vigilancias con los señores Sandoval y Parra, estableciendo que el local funcionaba de día y de noche, donde prácticamente no había personas consumiendo, sino que llegaban consumidores a comprar droga al lugar.

El representante del Ministerio Público destacó que Jairo Flores actuó como agente encubierto y revelador, cuando Carlos Ponce sacó droga de un bolso tipo banana y se la vendió al oficial Jairo Flores. Explicó que el 19 de marzo de 2022 se llevaron a cabo varias irrupciones, entre ellas al domicilio donde operaba el local "El Pirata Cojo", lugar en que se encontraron varias habitaciones en todas las cuales se halló droga. Agregó, que se irrumpió en el domicilio de calle 83, donde fue hallado Carlos Ponce, encontrándose en el velador una pesa gramera, y en el baño, bajo una de las cerámicas, armas de fuego envueltas en pañales de bebé, consistentes en 4 armas y más de 200 municiones de distintos calibres, además de 12.000 dosis equivalentes a 2,5 kilos de droga.

Respecto al delito de tenencia ilegal de armas y municiones, el Fiscal indicó que los testigos señalaron de manera conteste las armas, municiones y droga con las NUES respectivas, agregando que detrás de esta casa había otra vivienda donde se

detuvo a Ariel Torres, quien tenía una subametralladora de fogeo, arma que carecía de número de serie y constituía un arma de fuego prohibida.

Finalmente, en relación al delito de lavado de activos, el Fiscal citó la declaración de doña Scarleth Flores como testigo clave, refiriendo que ésta incluso mintió en su declaración prestada ante la Fiscalía.

Indicó que el oficial Jairo Flores además realizó un seguimiento patrimonial de Carlos Ponce, estableciendo que, según el SII, en 2020 obtuvo una renta de \$158.000 en total y no tenía bienes a su nombre, pero que respecto al inmueble de pasaje 114, Carlos Ponce y Thiare, compraron los derechos hereditarios de Luis Araya Torres y Heraldo Meneses Torres, interesándose Ponce en esos inmuebles, por lo que fueron a la Notaría, pero los herederos nunca recibieron dinero, sino sólo droga a cambio. El Fiscal concluyó que de esa manera se ocultó del sistema registral la adquisición de bienes obtenidos a causa de una actividad ilícita, configurándose el delito de lavado de activos contemplado en el artículo 27 letra a) primera parte de la ley respectiva.

Que, por su parte, en los **alegatos de clausura, la defensa** solicitó la absolución de su representado Carlos Ponce Vásquez respecto de todos los delitos imputados.

En relación al delito de tenencia ilegal de armas y municiones, argumentó que no se podía establecer participación de Ponce en dicho ilícito, señalando que del informe del perito Roberto Giménez respecto del revólver calibre 12 mm, por la data del arma, no fue posible realizar la prueba, pero que se infería que, por su carácter, estaría apta para el disparo. Preciso que en la foto 17 aparecía el número de serie 864, pero que no se le realizaron pruebas de disparo, sin saber si estaba apta para el disparo, siendo imprescindible una prueba de disparo, por lo que no se podría condenar por porte de un arma prohibida, ya que aparecía el número de serie en la evidencia fotográfica.

Respecto al delito de lavado de activos, la defensa argumentó que tampoco se configuraba dicho ilícito conforme a las letras a) y b) del artículo 27 de la ley N° 19.913. En cuanto a la compra de derechos hereditarios, destacó que el heredero Heraldo Meneses señaló que nunca recibió el dinero pactado, sólo recibieron a cambio drogas, y que respecto al inmueble de Guacolda fue cedido por dos de los herederos a Carlos Ponce sin tampoco recibir ningún pago, no pudiéndose efectuar la inscripción por faltar el tercer heredero. Sobre la camioneta Nissan, sostuvo que no se acreditó que hubiese sido adquirida por Carlos Ponce, ya que era de Thiare y conducida por ella, no existiendo fotografías donde constara que era conducida por Carlos Ponce, agregando que el día del allanamiento la camioneta estaba a más de 6 kilómetros de donde fue ubicado Carlos Ponce.

En relación al local comercial "El Pirata Cojo", la defensa indicó que Thiare nunca emitió boleta alguna, por lo que no se registró en el sistema financiero ningún ingreso, y que por estos derechos no se pagó dinero alguno, no acreditándose el ánimo de ocultamiento o disimulo. Argumentó que la hipótesis de letra b) del artículo 27 de la Ley N°19.913, de acuerdo a Jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema, se refiere a un tercero que no cometió el ilícito original y que sea éste el que persiga ánimo de lucro, por lo que no se le puede condenar por lavado de activos.

Respecto del delito de homicidio frustrado, la defensa también solicitó la absolucón, argumentando que la testigo declaró que siempre los problemas fueron con Andy y Jonathan, mas no con el acusado. Criticó la falta de diligencia de la Brigada de Homicidios, señalando que el Comisario Rebolledo, pese a señalar que el problema era con personas del pasaje 106 y 107, no fueron a buscar a nadie a ese lugar ni empadronaron testigos. Indicó que no se estableció ningún punto de acopio en pasaje 106 con 107, y que con la información de la testigo Jenny Acuña se dijo que Carlos Ponce vendía droga en pasaje 106 con 107, pero no se demostró de

modo alguno que el acusado vendiera o acopiara en ese lugar. La defensa planteó la tesis de que Andy y Jonathan fuesen los verdaderos atacantes de Patricio Soto y que sólo se dirigió la investigación en contra de Carlos Ponce por estar éste detenido, concluyendo que existía más que una duda razonable para establecer la participación de Carlos Ponce en este ilícito.

Finalmente, respecto al delito de tráfico de estupefacientes, la defensa argumentó que en relación a las ventas y drogas incautadas en calle 114, en todo el año de investigación no existían actos de venta grabados, fotografías de venta o traslado de droga por parte de Carlos Ponce, no habiendo elementos de corroboración de los dichos del oficial Flores. Destacó que después de ser detenido, se siguió vendiendo droga por Thiare en calle 114, y que varias de las drogas incautadas en calle 114 eran de los moradores de las distintas habitaciones de ese lugar. Respecto de las drogas, armas y municiones incautadas en calle 83, sostuvo que el sólo hecho de ser detenido en el lugar no bastaba para estimar que le pertenecían, no mostrándose fotografía alguna que diera cuenta de pertenencias de Carlos Ponce, así como tampoco se estableció que le pertenecieran las especies incautadas en el domicilio de calle 114. Preciso que en el velador donde se encontró la droga no había ninguna pertenencia de Carlos Ponce, y que en Ucayali tampoco se encontró droga ni se acreditó delito alguno, siendo ese el domicilio de Carlos Ponce. Concluyó señalando que Scarleth contrató al acusado para recuperar y reparar la casa de calle 83, y que en ese lugar había herramientas y pintura, y que no existían más antecedentes en contra de Carlos Ponce, más que el hecho de haber sido encontrado en este lugar.

En su **réplica el Ministerio Público**, el señor Fiscal sostuvo que el hecho fáctico del homicidio frustrado era que Carlos Ponce disparó a Patricio Soto. Respecto al delito de tráfico de estupefacientes, argumentó que Carlos Ponce tenía una posesión material del inmueble de calle 83, agregando que nadie tiene más de

12,5 millones en droga sin pedir explicaciones. Finalmente, en relación al delito de lavado de activos, el representante del Ministerio Público precisó que la simulación se daba precisamente porque en el sistema registral no figuraba la adquisición de Carlos Ponce.

Por su parte, **la defensa replicó**, argumentando que Scarleth mintió porque tenía miedo de ser involucrada con la casa en que se halló la droga. Respecto al delito de homicidio frustrado, sostuvo que el relato debía ser completo y que no bastaba con el momento del disparo para acreditar la participación de su representado. Finalmente, en relación al delito de lavado de activos, la defensa precisó que respecto a la simulación alegada por el Ministerio Público, no se logró inscribir la propiedad porque el tercer heredero estaba en España y no por una maniobra fraudulenta, pero lo más relevante era que no se recibió dinero alguno por esa cesión, de modo que no habría lavado de dinero al no haberse comprado cosa alguna con dinero.

En cuanto a las *palabras finales del acusado*, éste señaló ya haber prestado su declaración.

NOVENO: Que, como se indicó al comunicar el veredicto, con el mérito de la prueba rendida, se tuvieron por establecidos los hechos N°1 y 2 contenidos en la acusación formulada por la fiscalía, así como la participación que en dicho libelo se le atribuyó al encausado por esos ilícitos, esto es, que el día 18 de septiembre del año 2020, siendo aproximadamente las 20:00 horas, el acusado Carlos Ponce, llegó hasta el inmueble ubicado en calle 13 N°1365, lugar donde se encontraba la víctima Patricio Soto Acuña, al cual, el acusado con ánimo de ocasionarle la muerte y premunido de dos armas de fuego, le dispara en cuatro oportunidades, dándole tres proyectiles en la espalda de la víctima, uno en la región dorsal derecha, otro en el antebrazo y, también en la zona axilar derecha, los que de no mediar ayuda médica oportuna, le hubiesen ocasionado la muerte.

Asimismo, se dio por establecido en juicio que, con fecha 17 de marzo del 2022, a las 10:15 horas, en virtud de la ejecución de órdenes de entrada y registro e incautación, emanadas del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, personal del Departamento Microtráfico Cero de la Policía de Investigaciones, en forma simultánea, ingresó a los domicilios señalados, encontrando en:

a) Calle 83 N° 1472, Población la Faena, comuna de Peñalolén: Al ingreso de este inmueble, funcionarios policiales encontraron al acusado Carlos Ponce Vasquez, blanco principal de esta investigación en un dormitorio donde pernoctaba, al registro de esta dependencia, sobre un mueble tipo cómoda se encontró una bolsa de nylon que en su interior contenía 279 papeles cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso de 55.39 gramos en el mismo lugar una bolsa con cannabis sativa a granel con un peso de 30.97 gramos, más una balanza digital gramera y un teléfono celular.

Dentro de una dependencia destinada a baño, bajo una baldosa existía un forado en el cual se encontró; un revolver marca Galand& Sommerville, sin número de serie, calibre 12 mm; un arma de fuego tipo derringer, de dos cañones marca Davius Industries, modelo D-22 calibre .22 LR número de serie 543253 con dos cartuchos en su interior; un revolver Smith & Wesson con cinco cartuchos, calibre .38 número de serie 329764; un revolver colt con 6 cartuchos .38 spl número de serie 9121003; además en el mismo lugar se encontró gran cantidad de municiones, estas son. 100 municiones 9 mm; 50 munición calibre .32 auto; 50 cartuchos balísticos de diferentes marcas calibre .22 LR; 17 cartuchos balísticos marca CBC calibre .38 corto; 10 cartuchos balísticos calibre .38 SPL; 1 cartucho balístico calibre 10 mm; 4 municiones .44 win; 1 cartucho balístico .40 mm, 1 cartucho balístico .38 auto.

En el mismo baño en el costado poniente debajo de una baldosa, había también un forado, donde la Policía de Investigaciones halló, una bolsa negra (tipo

basura) que en su interior contenía, 7 bolsas de nylon transparente con 723,35 gramos de cannabis sativa granel; una bolsa negra de las mismas características que contenía un paquete rectangular enguinchado con cinta de embalaje verde con cannabis sativa con un peso de 1059.84 gramos. Había también tres bolsas negras, de las mismas características que las bolsas anteriores que contenían, 10 bolsas de nylon que en total tenían 2478 papeles cuadriculados contenedores de pasta base de cocaína con un peso de 525.77 gramos; En la otra bolsa, 11 bolsas de nylon contenedoras de cocaína base dosificada en 2755 envoltorios de papel cuadriculados con un peso de 529.11 gramos, y 10 bolsas de nylon con 2507 papeles cuadriculados con cocaína base con un peso de 516.77 gramos. Además, había una bolsa negra de las mismas características que contenía 4589 papeles cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso de 914.42 gramos.

Total, de la cocaína base incautada 2.541,46 gramos que estaban dosificados en 12.608 papeles cuadriculados.

b) Calle 114 N°1045, Población Villa Lo Arrieta I: En este inmueble, que el acusado Carlos Ponce, junto con su conviviente la condenada Tihare Espinoza utilizaban, como lugar de venta de droga, teniendo como fachada un local de comida rápida cuyo nombre de fantasía es “El Pirata Cojo”, encomendando la venta de droga de consumidores finales a terceras personas.

El mismo día, a las 10:15 horas, funcionarios policiales llegan al lugar, en el frontis del local comercial, efectuando la venta de droga, se encontraban los condenados Antonia Vásquez Meriño y Omar Pérez Garrido, y al ser registrados se le encontró a Omar Pérez entre sus vestimentas 22 papeles cuadriculados contenedores de cocaína base con un peso de 5.58 gramos, 3 pastillas de clonazepam y un envoltorio de cannabis sativa con un peso de 2.02 gramos además de 166 mil pesos producto del venta de droga, a Antonia Vásquez quien estaba en el mismo lugar, al registro de sus vestimentas se le encontró 69 envoltorios de papel

cuadriculado contenedores de pasta base de cocaína con un peso de 15.37 gramos y la suma de 14.410 pesos producto de la venta de droga; en el mismo instante funcionarios policiales ven a la condenada Ágata Espinoza Valenzuela arrojar por una ventana dos bolsas con cannabis sativa a granel la cual pesó 213.45 gramos.

Al ingreso del inmueble en el lugar destinado a baños, en el entre techo se encontraron 865 papeles cuadriculados contenedores de pasta base con un peso de 181.21 gramos, cuatro tiros calibre 12; 22 bolsas de mediano tamaño contenedoras de cocaína base con un peso de 45.81 gramos, una bolsa con cafeína a granel con un peso de 961.97 gramos y 102.53 gramos de cannabis sativa a granel.

Siguiendo con el registro en el dormitorio, donde se encontraba el condenado Carlos Gutiérrez Muñoz, al momento de la irrupción se le encontró 78.22 gramos de cannabis sativa a granel, elementos comúnmente utilizados para la dosificación de la droga, como rollos de bolsas de nylon pequeñas y una balanza digital además de la suma de \$141.000 pesos, en el dormitorio de otra vendedora al menudeo dirigida por Carlos Ponce de nombre Marjorie Pérez, se encontró dentro de un bolso rojo la suma de 511.850 pesos, en una caja de seguridad la policía halló \$98.000 pesos y 499.49 gramos de cannabis sativa granel.

c) Avda. Tobalaba N°5793; Torre B-1, depto. 102-B de la comuna de La Florida: En este inmueble, residencia habitual del acusado Carlos Ponce junto con su conviviente Tihare Espinoza, se encontraron 185 mil pesos y documentación relativa a adquisición y forma de pago del local de comida rápida irrumpido.

Los hechos establecidos en el apartado anterior configuran, en primer lugar, el delito de *homicidio frustrado* cometido en contra de la persona de Patricio Soto Acuña, ilícito descrito y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal.

De igual manera se configura el ilícito de *tráfico ilícito de drogas*, en la medida que el agente fue sorprendido manteniendo en su poder dichas sustancias ilícitas, sin contar con la autorización para ello y sin que se justificara que las mismas estaban

destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo.

La misma premisa fáctica ya reseñada configura, además, el delito de *tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones*, en la medida que se acreditó en la audiencia que el acusado mantenía en su poder un arma de fuego tipo derringer, de dos cañones marca Davius Industries, modelo D-22 calibre .22 LR número de serie 543253 con dos cartuchos en su interior; un revolver Smith & Wesson con cinco cartuchos, calibre .38 número de serie 329764; un revolver colt con 6 cartuchos .38 spl número de serie 9121003; además, le fue hallado al acusado, en el mismo lugar, gran cantidad de municiones, correspondientes a 100 municiones 9 mm; 50 municiones calibre .32 auto; 50 cartuchos balísticos de diferentes marcas calibre .22 LR; 17 cartuchos balísticos marca CBC calibre .38 corto; 10 cartuchos balísticos calibre .38 SPL; 1 cartucho balístico calibre 10 mm; 4 municiones .44 win; 1 cartucho balístico .40 mm, 1 cartucho balístico .38 auto; todos los cuales se encontraban aptos para ser disparados, sin la respectiva autorización para detentarlos.

A.- EN CUANTO AL HOMICIDIO FRUSTRADO.

DÉCIMO: Que, para establecer los hechos consignados en el motivo que antecede, el Tribunal tuvo en consideración la prueba testimonial rendida, así como la documental atinente a las atenciones médicas recibidas por la víctima, tras la ocurrencia de los hechos y los otros medios aportados en relación al ilícito ocurrido el 18 de septiembre de 2020.

Así, en primer lugar, se recibió la declaración de doña **Ayline Ulloa Garrido**, quien señaló ser funcionaria de Carabineros de Chile y en esa calidad señaló que acogió la denuncia de la madre de Patricio Soto Acuña, doña Jenny Acuña, el día 18 de septiembre de 2020. Indicó que estaba de servicio acompañada del sargento Héctor Añeñir Flores, cubriendo el cuadrante de la Subcomisaría de Peñalolén, cuando recibieron un llamado de CENCO para trasladarse a calle 13 N° 1305 de

Peñalolén. Declaró que se entrevistó con Jenny Acuña, quien le señaló que ese día su hijo Patricio había salido del domicilio dirigiéndose al pasaje 107 con el fin de comprar droga, ya que era adicto a la pasta base, y que una vez en el lugar retornó al domicilio después de haber tenido un altercado con los vendedores que no le habían entregado el vuelto.

La testigo depuso que según el relato de la madre, llegaron hasta el lugar dos sujetos de nombre Ángel y Carlos Ponce, donde Ángel mantenía una escopeta y Carlos Ponce portaba dos armas de fuego, una de color negro y otra de color gris tipo pistola. Preciso que Carlos Ponce apuntó a Patricio y le disparó 3 veces en la espalda, después de lo cual doña Jenny pidió asistencia para su hijo, a fin de que le prestaran los primeros auxilios. Indicó que dieron cuenta al fiscal de los hechos, los cuales ocurrieron cerca de las 20:00 horas, siendo acogido el procedimiento por Carabineros cerca de las 21:30 horas.

Al ser consultada por el defensor, la testigo señaló que se le acogió la denuncia a la madre porque ya no estaba presente la víctima. Declaró no recordar haber ido en búsqueda de las personas sindicadas ni que se hubiera detenido a alguna persona en esa oportunidad. Indicó recordar que había un testigo, pero no recordaba si le acogió la declaración ni su nombre, aunque era familiar de la víctima. Finalmente, precisó que según el relato, sin provocación alguna estas dos personas dispararon contra la víctima.

Del mismo modo, prestó declaración doña **Yeny Andrea Acuña Torres**, quien señaló ser la madre de la víctima Patricio Soto Acuña, y relató que el 18 de septiembre de 2020 estaban en su casa haciendo una comida con sus nietos, en familia, oportunidad en la que éstos quisieron salir a la calle. Señaló que estaban fuera de la casa, frente a la plaza, cuando su hijo le dijo que iba a entrar a sacar una chaqueta, momento en que llegaron Carlos Ponce con Ángel. Indicó que ellos venían porque su hijo estaba metido en la droga y ellos vendían droga, precisando

que días antes su hijo había ido a devolverle una droga que estaba mala y Ponce le dijo que no fuera a "dar jugo" porque con él nadie se metía.

La testigo declaró que Carlos Ponce venía con la pistola en la mano y Ángel venía atrás encapuchado, y que Carlos Ponce le disparó como 4 o 5 veces a su hijo, fallando el último disparo. Relató que uno de los disparos le entró por el hombro y le salió, y otro casi le tocó el corazón, siendo recogido por su pareja quien se lo llevó al SAPU que estaba más cerca. Preciso que Ángel disparó al aire como desde la mitad de la cuadra, pero que solamente Carlos Ponce disparó contra su hijo, y que portaba dos pistolas, una en el cinto y la otra en la mano. Indicó que después de disparar se devolvió hacia el pasaje donde vendían droga, y que al momento de disparar dijo que con él nadie se metía.

Relató que su pareja vio los hechos y que su hijo le dijo "me mataron, mamá", procediendo su pareja a sacarle el polerón, observando que tenía un hoyo que no sangraba. Señaló que justo iba pasando la ambulancia, estuvo en el SAPU y luego se lo llevaron al hospital, donde permaneció mucho tiempo en recuperación, agregando que actualmente tiene su empresa fuera de Santiago. Declaró que compareció ante la policía, dijo que conocía a la persona que le había disparado y lo identificó.

Al exhibírsele su declaración del 19 de septiembre de 2020, la testigo reconoció haber declarado que su hijo fue a comprar droga al pasaje 106 y que iba con \$5.000, siendo estafado con \$1.000 según lo que él le comentó. Preciso que su hijo había ido a comprar y que Andy lo había engañado con la droga que le vendió porque no era pasta, y que su hijo andaba todo drogado, cuando después llegó Carlos Ponce a dispararle. Agregó que justo su hijo se había drogado con pastillas y pasta, por lo que no quería salir.

Al ser consultada por la defensa, la testigo señaló que Andy era la dueña de la casa donde Carlos Ponce tenía su punto de venta, y que la droga que le compró era

de mala calidad. Indicó que anteriormente ya había pasado lo mismo, que le habían vendido droga adulterada, y que además de Andy también vendía Jonathan. Declaró que en la mañana del día de los hechos habían tenido una discusión porque su hijo le quería pegar a Andy, y ahí Carlos Ponce le dijo que con él nadie se metía.

Al exhibírsele nuevamente su declaración para evidenciar contradicciones, la testigo señaló que a eso de las 19:40 horas su hijo fue a comprar droga, pero que no sabía si había sido el mismo día u otro día, porque todos los días su hijo tenía problemas en esa casa con Andy o Jonathan. Preciso que Ángelo era el marido de Andy, y que Andy estaba viva pero que no la veía porque ya no vivía en Santiago. Declaró que todos los de esa casa vendían droga porque Carlos Ponce los tenía a todos vendiendo, y que éste se quedaba y pernoctaba en ese lugar, teniendo una pieza ahí. Indicó no conocer mucho a Thiare, y que en ese lugar no había negocio de comida rápida, siendo que donde estaba la comida rápida era detrás de un jardín, donde Ponce después se fue a vivir. Finalmente, señaló que en esa casa hoy vive la familia de la abuela de Andy, recordando que ahí vivían Jonathan, Ingrid, el Vecho, Ángelo y Andy, agregando que ella vivía a una cuadra de ese lugar y que esas personas la conocían.

Del mismo modo, prestó declaración el subcomisario de la Policía de Investigaciones don **Jose Ricardo Rebolledo Salazar**, quien señaló prestar funciones al tiempo de los hechos, en la Brigada de Homicidios Metropolitana, declarando que el día 19 de septiembre de 2020, recibió comunicación de la Fiscalía Oriente cerca de las 00:00 horas para adoptar un procedimiento por homicidio frustrado con arma de fuego, ocurrido en calle 13 N° 1365, comuna de Peñalolén.

En primera instancia, el declarante se trasladó al Hospital Luis Tizné donde comprobó la identidad de la víctima Patricio Soto Acuña, quien había ingresado a las 22:15 horas con diagnóstico de herida por arma de fuego en región torácica. Señaló que no fue posible entrevistar a la víctima ni al personal médico debido a que

se encontraba siendo intervenido quirúrgicamente, limitándose a constatar la lesión mediante el Documento de Atención de Urgencia.

Posteriormente, en el sitio del suceso, ubicado en calle 13 frente al N° 1305 de Peñalolén —domicilio identificado por un portón negro con diseños alusivos al equipo Colo Colo—, el testigo localizó sobre la vereda un proyectil balístico de color gris, el cual fue levantado bajo NUE respectiva para posterior pericia balística. Además, Carabineros entregó una polera marca Nike de color negro de propiedad de la víctima, que fue levantada por la Inspectora Bárbara Ramírez con NUE correspondiente.

El declarante informó que el Inspector Vásquez logró ubicar a Jenny Acuña, madre de la víctima, quien manifestó conocer a los autores del hecho, identificándolos como Carlos Ponce y otro sujeto de nombre Ángel. Con esta información, se trasladaron a la BICRIM donde, en coordinación con el equipo de control de microtráfico comunal, obtuvieron la individualización completa de los sujetos: se trataba de Carlos Ponce Vásquez y Ángel Campos.

El testigo explicó que se confeccionaron cuatro sets fotográficos, ubicando la fotografía de Carlos Ponce en el número 8 del set B y la de Ángel Hernández en el número 4 del set D, utilizando los restantes como distractores. La madre de la víctima reconoció categóricamente a ambos sujetos como partícipes del ilícito durante la exhibición de los sets fotográficos.

Al incorporarse la prueba documental signada con los N° 74, 75 y 76 y los otros medios de prueba correspondientes al N°1, se advirtió que los primeros estaban referidos a las atenciones y derivaciones medicas de las que fue objeto la víctima y el segundo correspondía a la fijación fotográfica del sitio del suceso.

El declarante precisó que según las diligencias investigativas realizadas, se estableció que Carlos Ponce portaba un arma de fuego tipo revolver, mientras que Ángel portaba un arma tipo escopeta al momento de los hechos.

Durante el contraexamen de la defensa, el testigo confirmó que la declaración de la madre de la víctima fue tomada cerca de la 1:00 de la madrugada y que no se procedió a la detención de persona alguna en el lugar. Asimismo, ratificó que según el relato materno, la víctima había salido a comprar pasta base con \$5.000 pesos, regresando con reclamos por haber sido estafado, para posteriormente volver a salir, momento en que habría llegado el acusado junto a Ángel procediendo a disparar contra Patricio Soto. El testigo reconoció que no se practicaron diligencias en el lugar donde la víctima habría intentado adquirir drogas y que faltó realizar el empadronamiento del sector y tomar declaración directa a la víctima debido a su delicado estado de salud.

Asimismo, compareció en juicio, prestando declaración el inspector de la Brigada de Homicidios Metropolitana **Felipe André Vasquez Guerrero**, quien señaló haber participado en las diligencias investigativas del homicidio frustrado de Patricio Soto ocurrido el 19 de septiembre de 2020, refiriendo que acompañó al equipo investigativo tanto al Hospital Luis Tizné como al lugar de los hechos, encargándose específicamente de tomar contacto con la madre de la víctima, mientras sus colegas realizaban las diligencias en el sitio del suceso.

El declarante informó que entrevistó a Jenny Acuña, madre de Patricio Soto, en su domicilio ubicado en calle 13 N° 1301, el día 19 de septiembre de 2020 a las 04:00 horas de la madrugada. Según el relato materno que recogió, el día 18 de septiembre su hijo había estado compartiendo con ella y otros familiares desde las 17:00 horas aproximadamente, y cerca de las 19:00 horas Patricio le comunicó que saldría a comprar pasta base, llevando consigo \$5.000 pesos en efectivo para dirigirse a una casa ubicada en la intersección de las calles 106 con 107.

El testigo relató que, conforme al testimonio de la madre, Patricio regresó a los pocos minutos reclamando que había sido estafado, manifestando que le faltaban \$1.000 pesos y que iría a reclamar por el dinero. La víctima se dirigió nuevamente al

lugar mencionado, regresando minutos después visiblemente molesto, sentándose en una silla ubicada fuera de la casa familiar.

Según la declaración recogida por el funcionario, transcurridos algunos minutos llegó al lugar Carlos Ponce —identificado por la madre como un conocido traficante y sicario del sector— acompañado de una persona llamada Ángelo. Ambos sujetos portaban armas de fuego: Carlos Ponce un arma de puño y Ángelo una escopeta. El testigo indicó que, según el relato materno, al llegar estos individuos, Carlos Ponce le gritó a Patricio "qué me vas a dar jugo tú a mí en mi casa" y acto seguido le disparó en el pecho con el arma que portaba, mientras Ángelo profería amenazas.

El testigo precisó que la madre relató cómo Patricio intentó huir del lugar pero se desplomó a pocos metros, siendo auxiliado por ella y otros familiares quienes lo trasladaron al hospital. Confirmó que las lesiones eran de gravedad por tratarse de heridas provocadas por arma de fuego en la región torácica.

Durante el contraexamen de la defensa, el testigo aclaró que la madre de la víctima no mencionó a ninguna persona llamada Andy durante su declaración. Respecto a si se realizaron diligencias en la casa ubicada en la intersección de las calles 106 con 107, donde supuestamente, Patricio había intentado comprar drogas, el funcionario manifestó no recordar haber concurrido a dicho lugar ese día, ni tener conocimiento sobre si otros funcionarios realizaron empadronamiento de testigos en esa ubicación.

El testigo confirmó que según el relato materno, Ángelo efectivamente realizó disparos al aire durante el incidente, aunque la declarante no especificó la cantidad de disparos efectuados. Finalmente, precisó que entregó toda la información recabada al Subcomisario Rebolledo y que los funcionarios encargados del sitio del suceso serían quienes tendrían conocimiento sobre el levantamiento de evidencias en el lugar.

A su vez, se recibió el testimonio de la Inspectora de la Policía de Investigaciones doña **Magdalena Sofía Ríos Barría**, quien declaró haber intervenido en la investigación del homicidio frustrado con arma de fuego en que resultó víctima Patricio Soto Acuña. Señaló que el día 16 de octubre de 2020, la víctima concurrió a las dependencias de la Brigada de Homicidios Metropolitana para prestar declaración sobre los hechos ocurridos.

Según el relato proporcionado por la víctima a la declarante, el día 18 de septiembre de 2020, en horas de la tarde, se encontraba compartiendo en su domicilio junto a vecinos y familiares, cuando decidió salir a comprar drogas a la vuelta de su casa, específicamente en el pasaje 107, donde residía un sujeto llamado Carlos Ponce. La víctima refirió que al efectuar la compra de estupefacientes, el mencionado sujeto lo habría estafado entregándole menor cantidad de droga que la correspondiente al dinero pagado.

La testigo relató que, según Patricio Soto, en ese momento apareció un segundo sujeto identificado como Ángelo, quien comenzó a efectuar disparos al aire, razón por la cual la víctima decidió regresar a su domicilio y se sentó en una silla ubicada en el frontis de la casa. Transcurrida aproximadamente media hora, llegaron ambos sujetos hasta el domicilio de la víctima portando armas de fuego: Carlos Ponce con un revólver y Ángelo con una escopeta.

Según la declaración recogida, Patricio Soto intentó huir hacia el interior del domicilio, pero fue impactado por dos proyectiles, uno en la espalda y otro en el brazo derecho. La víctima manifestó que posteriormente se dirigió caminando hacia el SAPU, desde donde fue derivado al Hospital Luis Tizné, permaneciendo hospitalizado durante cuatro días.

La testigo indicó que la víctima señaló conocer a ambos agresores desde hace años, estimando sus edades entre 35 y 45 años, y que ambos residirían en el pasaje 107. Respecto a la exhibición de medios probatorios, la funcionaria informó que

procedió a mostrar los sets fotográficos de imputados a la víctima, quien reconoció categóricamente en el set B, fotografía número 8, a Carlos Ponce Vásquez, identificándolo como persona conocida por ser traficante del sector y como quien el 18 de septiembre de 2020 llegó hasta su domicilio portando un revolver, disparándole e impactándole en el brazo derecho y la espalda.

Asimismo, indicó que la víctima reconoció en el set D, fotografía número 4, a Ángel Hernández Campos, individualizándolo como sujeto conocido desde hace años por dedicarse al tráfico de drogas en el sector y quien el día de los hechos llegó hasta su domicilio portando una escopeta y efectuando diversos disparos en su contra.

Durante el contraexamen de la defensa, la testigo precisó que la víctima ubicó temporalmente el problema inicial con la compra de drogas solo indicando que habría ocurrido en horas de la tarde, sin mayor especificidad horaria. Aclaró que según el relato de Patricio Soto, él habría entregado dinero a una mujer que vivía en el lugar, quien a su vez se lo habría entregado a Carlos Ponce, recibiendo este último menos droga de la debida.

La funcionaria confirmó que, según la víctima, en el lugar donde inicialmente se produjo el problema por la droga, Carlos Ponce no portaba arma de fuego, siendo posteriormente, cuando llegó al domicilio de la víctima, que se presentó armado. Reconoció que, basándose únicamente en la información proporcionada por la víctima, el pasaje 107 correspondería al domicilio del acusado, precisando que no se realizaron diligencias de empadronamiento de testigos en dicho lugar ni se practicaron allanamientos en búsqueda de armas o drogas.

De los relatos reseñados, se desprende que, tras un incidente previo entre Carlos Ponce Vásquez y Patricio Acuña por una transacción de droga que resultó insatisfactoria para este último, se produjo un conflicto, tras el cual, el acusado concurrió en compañía de un sujeto de nombre Ángel hasta el domicilio de la

víctima y su familia, ubicado en calle 13 frente al N° 1365, comuna de Peñalolén, portando el acusado dos armas, una de ellas en el cinto del pantalón y la otra con la que disparó a la persona de Patricio Acuña, provocándole tres lesiones por arma de fuego en la zona dorsal derecha, antebrazo y zona axilar, conforme dan cuenta el Dato de Atención de Urgencia N° 43 del Consultorio SAPU La Faena, el Dato de Atención de urgencia N° u0000728669 del Hospital Luis Tizné, ambas de fecha 18 de septiembre del 2020, y la Solicitud de interconsulta del Servicio de salud metropolitano oriente, SAPU La faena de fecha 19 de septiembre del 2020.

De la dinámica ante referida dieron cuenta de manera detallada, la madre de la víctima, la funcionaria de carabineros doña Ayline Ulloa Garrido y los funcionarios de la Policía de Investigaciones don José Rebolledo Salazar, Felipe Vásquez Guerrero y Magdalena Ríos Barra, quienes habiendo concurrido al sitio del suceso y tomado declaración a doña Jenny Acuña, permitieron dar por establecido el ataque sufrido por Patricio Acuña a manos de Carlos Ponce, asertos que no lograron ser desvirtuados por prueba contraria de la defensa de éste.

El resultado material, esto es las lesiones del ofendido, se estableció de manera categórica con los documentos de Dato de Atención de Urgencia N° 43 del Consultorio SAPU La Faena, la Solicitud de interconsulta del Servicio de salud metropolitano oriente, SAPU La faena, además del Dato de Atención de urgencia N° u0000728669 del Hospital Luis Tizné, que da cuenta de haber quedado hospitalizado la víctima producto de la gravedad de las lesiones ya descritas que presentaba y la compatibilidad de estas con el relato de la testigo presencial doña Jenny Acuña.

La relación causal entre el despliegue del hechor y las lesiones que presentaba la víctima se desprende de los documentos clínicos antes referidos, que concluyen que las lesiones eran atribuibles a una agresión por proyectil balístico.

El agente puso de su parte todo lo necesario para lograr su propósito y la circunstancia de que el ofendido haya sobrevivido al ataque, tuvo lugar por causas independientes de la voluntad del sujeto activo, como lo es el hecho de haber recibido de manera oportuna y con medios idóneos el tratamiento adecuado para salvarle la vida, lo que permite concluir que el grado de ejecución del delito fue el de frustrado.

UNDÉCIMO: Que, la participación del encausado se estableció con la sindicación que de su persona efectuó en estrados la madre del ofendido por el delito, testigo presencial del hecho, unido a la identificación que esta realizó del mismo sujeto durante la etapa de pesquisas en los set de fotografías que les fueron exhibidos por los funcionarios de la Policía de Investigaciones, diligencia de la cual dio cuenta el subcomisario Jose Ricardo Rebolledo Salazar, así como también el reconocimiento efectuado por la propia víctima, mediante la exhibición de set fotográficos, a la fecha de prestar declaración ante la Brigada de Homicidios Metropolitana el día 16 de octubre de 2020, diligencia que fue informada en juicio por la inspectora Magdalena Ríos Barría.

De esta forma, atendida la contundencia de la prueba de cargo, el tribunal concluyó que Carlos Eduardo Ponce Vasquez intervino de una manera inmediata y directa en la ejecución del delito, por lo que fue considerado autor de este.

B.- EN CUANTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, por otra parte, para dar por acreditados los hechos referidos en el considerando Noveno y que dicen relación con el ilícito de tráfico de drogas, el Tribunal tuvo en consideración lo expuesto por los funcionarios de la Policía de Investigaciones que participaron del procedimiento, así como la numerosa prueba documental e informes periciales aportados en juicio.

De esta manera cabe tener presente la declaración de *Marcel Parra Sepúlveda*, quien dijo ser Inspector de la Policía de Investigaciones, BICRIM

Peñalolén, y declaró haber participado en la investigación iniciada en marzo de 2021 respecto del imputado Carlos Ponce, apodado "Pirata Cojo", quien era investigado por homicidio frustrado relacionado con temas de drogas. El declarante explicó que dicho apodo se encontraba registrado en las bases de datos policiales debido a que el sujeto presenta un impedimento físico en una de sus piernas que lo hace cojear, además de una afección en uno de sus ojos.

El testigo informó que la investigación se originó a partir de 16 denuncias ciudadanas y municipales que indicaban actividades de tráfico de drogas en pequeñas cantidades en un local de comida rápida denominado "El Pirata Cojo", ubicado en calle 114 N° 1045, Peñalolén. Adicionalmente, se recibió una denuncia conforme al artículo 22 de la Ley de Drogas de similar naturaleza, la cual también sindicó a la pareja de Carlos Ponce, identificada como Tihare Espinoza.

Según el relato del funcionario, tras analizar las 16 denuncias que sindicaban a Carlos Ponce y Tihare Espinoza como dedicados a la venta de drogas en el domicilio mencionado, el 6 de abril de 2021 se practicó una autorización de agente revelador. El declarante concurrió personalmente al lugar, constatando que funcionaba, efectivamente, un local de comida rápida con dos puertas de acceso: una que permitía el paso a un pasillo independiente y otra que daba acceso tanto a la casa habitación como al local comercial. El establecimiento contaba con un cobertizo metálico equipado con mesas y sillas para la concurrencia de público, aunque en las visitas realizadas no se observaba afluencia significativa de personas consumiendo alimentos.

El testigo relató que al consultar por Carlos Ponce y solicitar la venta de drogas, le informaron que no se encontraba presente, pero confirmaron que sí podían venderle estupefacientes. A partir del 26 de abril de 2021 se iniciaron las vigilancias del domicilio, utilizando diversos medios técnicos como cámaras, teléfonos celulares y drones, dependiendo de las circunstancias del lugar.

El funcionario detalló que el 29 de abril de 2021, durante las vigilancias, observaron a una persona que concurrió al lugar sin comprar comida rápida y se retiró, siendo posteriormente controlado el sujeto de nombre Alejandro Sánchez, quien portaba dos envoltorios con cocaína base. Este individuo declaró haber sido atendido por un sujeto que trabajaba para el "Pirata Cojo", quien le vendió la droga por \$2.000 en efectivo. Ese mismo día, mediante equipos de drones, observaron a una mujer que concurrió al lugar, permaneció unos segundos y salió, siendo controlada posteriormente por personal policial encontrándosele cinco envoltorios con cocaína base. La mujer señaló haber concurrido al "Pirata Cojo" a comprar drogas, siendo atendida por un sujeto que trabajaba para Carlos Ponce.

El declarante informó que posteriormente se controló a Lilian Adame (con cinco envoltorios en su poder) y Manuel Gaete (que portaba dos envoltorios de cocaína base), quienes manifestaron haber concurrido al "Pirata Cojo" a comprar drogas, siendo atendidos por sujetos que trabajaban para Carlos Ponce. En todos estos casos se informó al fiscal para la incautación correspondiente.

Continuando con los seguimientos y vigilancias para establecer domicilios de acopio, el testigo señaló que se determinó que Carlos Ponce utilizaba habitualmente un vehículo Nissan X-Trail de propiedad de Tihare Espinoza, concurriendo al domicilio de esta última en Tobalaba con Departamental, así como a los domicilios de su madre en pasaje Ucayali y de su suegra en pasaje Maqui. El 6 de junio de 2021 se solicitó nuevamente autorización para agente revelador, designándose al funcionario Jairo Flores, el que fue atendido directamente por Carlos Ponce, quien le vendió cinco envoltorios de cocaína base por \$5.000.

El declarante explicó que se obtuvo autorización para instalar un GPS al vehículo Nissan X-Trail, lo que permitió determinar los movimientos del vehículo y establecer diversos domicilios utilizados por Carlos Ponce, incluyendo su morada en Av. Departamental con Tobalaba, los domicilios de familiares, el local comercial

para venta de drogas, y un domicilio en pasaje 83 N° 1472, población La Faena, que era utilizado como centro de acopio según información proporcionada por vecinos.

El testigo relató que el 17 de marzo de 2022 se materializaron las entradas y registros simultáneas en todos los domicilios identificados, estando él a cargo del procedimiento en el domicilio de calle 114 N° 1045, Peñalolén. En dicho lugar encontraron a Omar Pérez y Antonia Vásquez, incautándoseles 29 y más de 60 envoltorios de cocaína base respectivamente, quienes serían los encargados de efectuar las ventas cuando Ponce no se encontraba presente. Además, una mujer identificada como Agatha Espinoza arrojó por la ventana un bulto conteniendo 213 gramos de cannabis sativa.

Durante la revisión del inmueble, que contaba con múltiples habitaciones subarrendadas, cuyos pagos se efectuaban directamente a Tihare Espinoza, fueron hallados diversos ocupantes en posesión drogas: Carlo Gutiérrez con cannabis sativa, prensas y otros elementos, y Marjorie Pérez con 499 gramos de cannabis y \$400.000 en efectivo. El declarante precisó que Omar Pérez era padre de Marjorie Pérez.

El funcionario detalló que en una de las puertas del local, sobre el marco, se encontraron 861 envoltorios de papel cuadriculado conteniendo sustancia presuntamente cocaína base, mantenidos al alcance de las personas que estaban afuera para su comercialización. En el baño interior, de acceso restringido a quienes operaban en el local, y en un sótano del sector de acceso exclusivo, se encontraron aproximadamente 900 gramos de carbonato de sodio utilizado para el abultamiento de drogas.

Respecto al procedimiento simultáneo llevado a cabo en pasaje 83 N° 1472, Población la Faena, Peñalolén, el testigo informó que allí fue encontrado Carlos Ponce acostado en una habitación, descubriéndose bajo una cerámica removible

más de 12.000 envoltorios de cocaína base listos para su comercialización, diferentes armas de fuego tipo revolver, cannabis sativa a granel y otros elementos.

Al exhibírsele la documental signada con los N° 62, 65 y 68, reconoció que esta correspondía a las actas de recepción de la droga incautada en el procedimiento del que fue parte y que fue registrada bajo los NUE 2927-2021, 3187-2021 y 3188-2021, respectivamente.

Durante el contraexamen de la defensa, el testigo confirmó que el fiscal les había informado previamente que el sujeto mantenía una causa anterior por homicidio frustrado, posiblemente relacionada con problemas de drogas. Aclaró que no recordaba diligencias específicas en el domicilio de calle 106 con 107, y que efectivamente se vendía comida rápida en el local, aunque al momento de la irrupción solo se encontraban personas dedicadas a la venta de drogas.

El funcionario precisó que durante las vigilancias con drones no pudieron identificar específicamente quién conducía el vehículo cuando este se desplazaba, y que no existen grabaciones de la compra efectuada por el agente revelador Jairo Flores. Confirmó que en los domicilios de la madre y suegra de Ponce no se encontró evidencia, y que no se interceptaron comunicaciones telefónicas durante la investigación. Finalmente, señaló desconocer si se estableció alguna conexión entre el armamento hallado en el lugar y el utilizado en el homicidio frustrado por el cual era investigado inicialmente Carlos Ponce.

Asimismo, se recibió el testimonio de la Subinspectora de la Policía de Investigaciones BICRIM Peñalolén doña *María Alarcón Espinoza*, quien declaró haber participado en la irrupción al inmueble ubicado en calle 114 N° 1045, Población Villa Lo Arrieta I, Peñalolén, en el marco de la investigación desarrollada por la Agrupación de “Microtráfico 0” de Peñalolén contra Carlos Ponce y Tihare Espinoza por infracciones a la Ley N° 20.000. La declarante indicó que había

conocimiento de que en contra de Carlos Ponce existía una investigación paralela por delito de homicidio.

La testigo explicó que el inmueble de calle 114 había sido establecido como lugar de acopio y venta de drogas, al igual que el domicilio de calle 83 N° 1472 ubicado en Villa Lo Arrieta, que fue determinado como punto de venta utilizado por Carlos Ponce. La irrupción se materializó el 17 de marzo de 2022 a las 10:15 horas, participando la declarante en compañía del funcionario Marcel Parra.

Al ingresar al inmueble, la testigo observó primeramente el local comercial denominado "El Pirata Cojo", dedicado a la venta de comida rápida. En este sector se controló a Omar Pérez, encontrándosele en su poder 22 papeles blancos cuadriculados conteniendo cocaína base, además de \$166.000 en efectivo. Pérez se encontraba sentado en el local comercial junto a las personas que realizaban la venta de drogas en el lugar.

En el mismo sector, la funcionaria halló a Antonia Vásquez Meriño portando 69 papeles blancos cuadriculados con cocaína base y \$14.000 en dinero efectivo. La declarante precisó que el inmueble contaba con tres habitaciones, constatándose que en la habitación utilizada por Carlos Gutiérrez Muñoz se encontraron 78 gramos de cannabis y \$141.000 en dinero efectivo.

En otra habitación, ocupada por Marjorie Pérez, se incautaron 430 gramos de cannabis y \$600.000 en efectivo. La testigo informó además que en el sótano del inmueble se encontraron 961 gramos de carbonato de sodio, sustancia utilizada para aumentar el volumen de las drogas, constatándose que dicho inmueble era utilizado únicamente por Carlos Gutiérrez y Maryorie Espinoza.

Respecto a otros hallazgos significativos, la declarante señaló que en el baño se encontraron 865 envoltorios de pasta base y 22 bolsas conteniendo cannabis y cocaína base. La funcionaria recordó que al momento de la irrupción se encontraba

Tihare Espinoza al interior del inmueble, aunque no pudo precisar si Carlos Ponce estaba presente.

Al exhibírsele la documental signada con los N° 20 y 23 del auto de apertura, reconoció que esta correspondía a las actas de recepción de la droga incautada en el procedimiento del que fue parte y que fue registrada bajo los NUE 6329810 y N.U.E 6329793, N.U.E 6329803, N.U.E 6329809, N.U.E 6329811, N.U.E 6329805, N.U.E 6329825, N.U.E 6329828 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, respectivamente.

Durante el contraexamen de la defensa, la testigo confirmó tener conocimiento de que el domicilio fue allanado por segunda vez, encontrándose drogas en esa oportunidad, aunque no recordó las cantidades específicas ni si en ese segundo procedimiento se detuvo a Tihare Espinoza. Preciso que durante su participación en el allanamiento se procedió a la detención de Carlos Gutiérrez Muñoz y Marjorie Pérez.

La funcionaria recordó que Agatha Espinoza fue detenida tras arrojar por la ventana de su habitación una bolsa conteniendo drogas, y que Darinka Gómez también fue detenida, aunque no participó directamente en este último procedimiento. Aclaró que Omar Pérez se encontraba sentado frente al local en sillas junto a Antonia Vásquez, lugar donde fue detenido, y que tenía en su poder una pipa artesanal para consumir pasta base ubicada donde él se encontraba sentado.

La testigo precisó que el inmueble tenía tres pisos, y que el local comercial cubría el frontis y el primer piso. Al momento del ingreso se encontraron varias personas al interior, aunque no pudo determinar si residían en el lugar o estaban de visita. No recordó exactamente cómo se vinculó a cada sujeto con su respectiva habitación, si fue mediante cédula de identidad u otros datos, ni pudo precisar si alguna de las habitaciones se vinculaba directamente con Carlos Ponce.

Finalmente, la declarante no pudo determinar si el baño donde se encontraron las drogas era de uso público o personal, y manifestó no tener conocimiento sobre el eventual hallazgo de armamento durante el procedimiento.

Del mismo modo prestó testimonio el subcomisario de la Policía de Investigaciones de la BICRIM Peñalolén ***Daniel Esteban Díaz Olivos***, quien declaró desempeñarse como jefe de la Agrupación de Microtráfico N° 0 desde el año 2015 para la investigación del delito de tráfico de drogas en la comuna de Peñalolén, refiriendo haber dirigido la investigación contra Carlos Ponce Vásquez, apodado "El Pirata Cojo", iniciada en el año 2021 a partir de una declaración acogida al artículo 22 de la Ley N° 20.000.

El testigo explicó que la investigación se originó por la denuncia conforme a la cual se indicaba que en Peñalolén existía un sujeto apodado "El Pirata Cojo", identificado como Carlos Ponce Vásquez, quien se dedicaba al tráfico de drogas en un domicilio ubicado en Villa Lo Arrieta, utilizando como fachada un local comercial de venta de comida rápida. Esta actividad la realizaría en compañía de su pareja Tihare, contando con una serie de personas que trabajaban para él en las actividades ilícitas de adquisición, paqueteo y venta de drogas.

El funcionario policial informó que Ponce ya estaba siendo investigado por un delito de homicidio frustrado, existiendo una investigación paralela en curso. Entre marzo y diciembre de 2021, comenzaron a recibirse aproximadamente 16 denuncias a través del sistema "Denuncia Seguro", las cuales coincidían en señalar que esta persona se dedicaba al comercio de drogas en el local comercial "El Pirata Cojo", denominación que hacía alusión a características físicas particulares del sujeto en uno de sus ojos y una de sus piernas que lo hacía renguear al caminar. La investigación fue dirigida por el fiscal Ernesto Navarro Zamora.

El funcionario confirmó que se corroboró que Ponce tenía una hija en común con Tihare, procediendo a identificar al imputado presente en el tribunal

durante la audiencia. Se solicitó autorización para la técnica de agente revelador, siendo el Inspector Marcel Parra Sepúlveda quien concurrió el 6 de abril de 2021 al domicilio y adquirió cocaína base, constatándose que el local realizaba en forma paralela la venta de drogas.

A partir del 20 de abril de 2021 se iniciaron las vigilancias con drones, identificándose que muy pocas personas concurrían al local para adquirir productos alimentarios, mientras que otras permanecían por muy pocos minutos y se retiraban sin portar nada en las manos. El primer sujeto controlado fue Alejandro Sánchez, quien portaba dos envoltorios de pasta base y declaró haber concurrido al local a adquirir droga de parte de un colaborador de Carlos Ponce.

El 29 de abril de 2021, mediante las vigilancias, se logró controlar a Lilian Adasme (encontrada con dos envoltorios de cocaína base) y Manuel Garate Cid (dos envoltorios de cocaína base), quienes en sus declaraciones manifestaron haber concurrido al lugar preguntando por Carlos Ponce y haber adquirido droga de uno de sus colaboradores. Posteriormente, el Inspector Jairo Flores efectuó una segunda diligencia de agente revelador, obteniendo drogas directamente del propio Carlos Ponce.

El declarante detalló que Carlos Ponce y Tihare se movilizaban en un vehículo Nissan X-Trail patente PHVS37, llegando al local comercial de pasaje 114, pero sin habitar ese domicilio. A través de las vigilancias se estableció que residían en un departamento ubicado en Avenida Tobalaba 5793, torre B, departamento 102, en La Florida, identificándose este lugar por el logo del condominio "Altos del Parque" y el estacionamiento del vehículo en el lugar.

Señaló que mediante las vigilancias se determinó que el vehículo transitaba por distintos lugares, incluyendo los domicilios de familiares de Carlos y Tihare en Maqui y Ucayali, identificándose además un quinto domicilio en pasaje 83 N° 1472. El 20 de enero de 2022, autorizado por el 13° Juzgado de Garantía, se instaló un

dispositivo GPS al vehículo, pudiendo establecerse que el sujeto tenía como rutina habitual salir de su domicilio, pasar por Maqui y Ucayali, llegar al domicilio de calle 114 en Lo Arrieta, y también al de pasaje 83 en el sector Faena 1.

El testigo explicó que todos estos domicilios se encontraban alejados unos de otros, siendo utilizado el domicilio de calle 83 N° 1472 de manera habitual por Carlos Ponce para mantener el acopio de drogas, estrategia empleada para que en caso de detención se les encuentre la menor cantidad de droga posible. Se logró fotografiar al imputado utilizando el domicilio de calle 83.

Respecto a la exhibición del DVD con georreferenciación de la camioneta Nissan, el declarante explicó los movimientos registrados entre el 24 y 27 de enero de 2022, incluyendo desplazamientos desde Tobalaba hacia La Faena en horarios nocturnos y madrugada, coincidentes con los horarios habituales de comercio de drogas. Los registros mostraron que el sujeto frecuentaba los domicilios de calle 83 y pasaje 114 en horarios poco frecuentes, especialmente durante la madrugada.

El 17 de marzo de 2022 se ejecutaron entradas y registros simultáneas en cinco domicilios, correspondiendo al declarante la entrada al domicilio de Tobalaba, donde se incautó dinero en efectivo y diversa documentación que vinculaba a Carlos y Tihare, incluyendo tarjetas de un centro recreacional de ellos y su hija, y documentación relacionada con el local comercial.

Durante la exhibición de fotografías del domicilio de Tobalaba, el testigo identificó diversos sectores del departamento, incluyendo el acceso, living-comedor, cocina, habitación de la hija del acusado, habitación matrimonial de Carlos y Thiare, teléfono celular y recipiente con dinero en efectivo, cartera con dinero, y una caja fuerte vacía ubicada en el walking closet.

El funcionario informó que en Villa Las Faenas, pasaje 83, la diligencia fue practicada por Ignacio Sandoval, donde fue hallado Carlos Ponce junto con una gran cantidad de drogas (casi 5 kilogramos entre cannabis y pasta base de cocaína),

gran parte oculta bajo las cerámicas del baño. Se trataba de más de 12.000 envoltorios que generarían un retorno económico superior a los \$12.000.000, encontrándose además gran cantidad de armas y municiones. En paralelo, en pasaje 114 también se encontró droga lista para dosificar y se procedió a la detención de personas.

Durante el contraexamen de la defensa, el testigo aclaró que no recordaba advertencias sobre venta de drogas en pasaje 106 con 107, y que en el local de comida rápida había trabajadores. Confirmó que no se fotografió la diligencia de agente revelador por razones de seguridad operacional. Preciso que el domicilio de pasaje 83 N° 1472 aparecía asociado en el Registro Civil a nombre de Scarleth Meza Escudero, y que los registros GPS marcaron presencia en ese domicilio el 22 de enero y 15 de marzo.

El declarante confirmó que el 23 de noviembre de 2022 se realizó un nuevo allanamiento al domicilio de Tobalaba, donde no se encontró a Tihare, procediéndose también a un nuevo allanamiento del "Pirata Cojo", encontrándose nuevamente drogas. Finalmente, informó que tomó declaración a Tihare durante el proceso, quien junto a su pareja administraban "El Pirata Cojo", establecimiento que estaba a nombre de ella, y que aparentemente arrendaba piezas en dicho local.

Se recibió también la declaración del Inspector de la Policía de Investigaciones de la BICRIM Peñalolén ***Ignacio Alfonso Sandoval Álvarez***, quien refirió haber participado en dos etapas de la investigación contra Carlos Ponce: en el proceso investigativo y en la entrada y registro del 17 de marzo de 2022. Explicó que la investigación se originó por una declaración acogida al artículo 22 de la Ley de Drogas, complementada con 16 denuncias recibidas a través del programa "Denuncia Segura", existiendo además una investigación paralela por homicidio en contra del mismo acusado.

El declarante relató que le correspondió monitorear el dron que vigilaba el local comercial denominado "El Pirata Cojo", identificado como punto de interés criminalístico dentro de las denuncias recibidas. Durante estas vigilancias, operando junto al funcionario municipal que controlaba el dron, observó como un sujeto se acercaba al local y se retiraba rápidamente, siendo controlado en las inmediaciones. Se trataba de Lilian Adasme, a quien se le encontraron cinco envoltorios de papel blanco conteniendo cocaína base. Minutos después, el testigo observó la llegada de otro sujeto que ingresó al local por breves minutos, retirándose posteriormente hacia las inmediaciones donde fue controlado por personal policial, identificándose como Manuel Gaete, a quien se le encontraron dos envoltorios blancos cuadriculados con cocaína base. Ambos sujetos, al ser entrevistados, señalaron haber concurrido a comprar drogas al local administrado por Carlos Ponce, quien mantenía otros sujetos para la venta.

El funcionario informó que se realizaron técnicas de agente revelador con el funcionario Jairo Flores. Se solicitó entrada y registro para cinco domicilios: calle 114, calle Maqui, calle Ucayali, Avenida Tobalaba N°5793 (residencia de Tihare y Carlos Ponce), y calle 83 N° 1472, este último identificado como lugar de acopio. Para efectos investigativos se utilizaron fijaciones fotográficas y se instaló un dispositivo GPS en el vehículo de la pareja de Carlos Ponce, una camioneta Nissan X-Trail roja, patente PHVS37.

Durante las vigilancias se logró la fijación fotográfica del vehículo y de Carlos Ponce ingresando al domicilio de calle 83, el cual contaba con dos accesos: un portón de corredera y un acceso peatonal. El 17 de marzo de 2022, a las 10:16 horas, el declarante participó en la irrupción de calle 83 N° 1472, acompañado del Inspector Yerald Acuña y agrupaciones de La Florida y Puente Alto, realizando ingresos simultáneos por ambas puertas de acceso.

Al ingresar encontraron a Carlos Ponce recostado en una cama dentro de un domicilio muy pequeño de no más de 8 metros cuadrados, compuesto por tres ambientes: un baño, una habitación y un pasillo. El declarante aclaró que por el portón de corredera había otra construcción de mayor superficie, pero Carlos Ponce se encontraba en la edificación pequeña.

Señaló que durante el registro de la habitación, en el primer cajón de una cómoda se encontró una balanza digital color gris, identificada con la NUE 6329823, una bolsa de nylon transparente con sustancia vegetal correspondiente a cannabis sativa (aproximadamente 30 gramos) correspondiente a la NUE 6329824 y otra bolsa conteniendo 279 envoltorios de papel con sustancia en polvo presuntamente cocaína base, con un peso de 55 gramos, que arrojó coloración positiva a cocaína base 69% de acuerdo a la NUE 6329825.

El testigo detalló minuciosamente el registro del baño de aproximadamente 2x2 metros con piso de cerámica, estableciendo que una de sus cerámicas no mantenía fragüe. Al levantar dos palmetas que no tenían fragüe, observaron agujeros conteniendo paquetes blancos correspondientes a pañales envueltos con cinta adhesiva negra, encontrando cuatro armas de fuego: un revólver marca Gala sin número de serie visible calibre 12; un revólver con dos cañones marca Darius Industries con dos cartuchos calibre .22 largo; un revólver calibre .38 con cinco cartuchos .38; y un revólver marca Cold con seis cartuchos convencionales.

Asimismo, se encontró gran cantidad de municiones: 100 cartuchos 9mm, 50 cartuchos .32 auto, 50 cartuchos .22 largo, 17 cartuchos .38 corto, 10 cartuchos .38 especial, 1 cartucho 10mm, 4 municiones .44 win; 1 cartucho balístico .40 mm, 1 cartucho balístico .38 auto.

En el mismo baño, bajo una segunda baldosa, se encontró un agujero con un balde plástico color azul conteniendo varias bolsas de nylon: siete bolsas con sustancia a granel café verdoso seco presuntamente cannabis (aproximadamente 700

gramos) y un paquete rectangular envuelto con cinta adhesiva verde conteniendo sustancia vegetal que dio positivo para cannabis sativa, con un peso de 1,79 kilogramos.

El deponente detalló que en el mismo contenedor se encontraron múltiples bolsas con envoltorios de papel blanco cuadriculado: 10 bolsas conteniendo 2.500 envoltorios (peso aproximado 500 gramos), una segunda bolsa con 11 bolsas interiores conteniendo 2.700 envoltorios, una tercera bolsa con 10 bolsas conteniendo aproximadamente 2.500 envoltorios (peso aproximado 500 gramos), y una última bolsa con 2.500 envoltorios de papel blanco conteniendo sustancia en polvo seco beige correspondiente a cocaína base. El peso total fue de 2,542 kilogramos con 12.800 envoltorios de papel blanco cuadriculado.

Al exhibírsele el acta de recepción de droga 1899-2022, reconoció esta como el documento que contemplaba las NUE 6329805 y 6329828 correspondientes a droga incautada en el domicilio de pasaje 83 el 17 de marzo de 2022.

Indica que se procedió a la detención de Carlos Ponce en la primera vivienda y de Ariel Reyes en la segunda vivienda del mismo domicilio. Durante la exhibición de las 64 imágenes fotográficas del domicilio, el testigo identificó el frontis con los dos accesos, el pasillo y baño pequeño, las baldosas retiradas con los agujeros donde estaban las armas y municiones, los paquetes de pañales envueltos en cinta negra adhesiva, las armas de fuego y municiones, las bolsas con envoltorios, el dormitorio donde se encontraba Ponce recostado, y todos los elementos incautados.

Durante el contraexamen de la defensa, el funcionario precisó que en abril de 2021 ya se encontraban investigando, siendo la diligencia con el dron la primera en la que participaba. Confirmó desconocer quién era el propietario del local "El Pirata Cojo" y que Tihare era la pareja de Carlos Ponce. Explicó que el domicilio de calle 83 correspondía al lugar de acopio y que no recordaba diligencias en pasaje 107 con 106. Aclaró que la diferencia en los pesos se debía a que cada envoltorio mantenía

aproximadamente 0,1 gramos, siendo el mayor peso correspondiente al papel envoltorio, y que las armas estaban envueltas de manera que resultaban de difícil acceso. Finalmente, confirmó no haber visto a nadie trabajando en el lugar durante el procedimiento.

Por su parte, el testigo *Yerhal Ignacio Acuña Zapata*, quien señaló desempeñarse como Inspector de la Policía de Investigaciones de BRIRO Antofagasta, declaró haber participado en la entrada y registro ejecutada el 17 de marzo de 2022 en el domicilio ubicado en calle 83 N° 1472, Peñalolén, a las 10:13 horas de la mañana, junto al Inspector Sandoval.

Relató que al momento del ingreso encontraron al imputado Carlos Ponce acostado en una habitación, procediéndose inmediatamente a la revisión del dormitorio donde se encontró diversa evidencia: una balanza digital blanca, cannabis sativa de 30 gramos, y 279 envoltorios de papel conteniendo cocaína base. El testigo precisó que todas estas evidencias se encontraban dentro de un velador contiguo a la cama del imputado.

En otra dependencia correspondiente al baño, el funcionario observó que había dos cerámicas sueltas que no tenían fragüe, encontrándose en su interior seis pañales que envolvían armas de fuego y municiones de diverso calibre. Específicamente se hallaron: un revólver marca Colt con seis cartuchos; un revólver Smith and Wesson con cinco cartuchos; una pistola con dos cañones y municiones; un revólver adicional; 100 cartuchos 9mm; 50 cartuchos .32; 50 cartuchos .22; 17 cartuchos .38 corto; 10 cartuchos .38 SPL; 4 cartuchos calibre .34; y 1 cartucho .38. El declarante aclaró que esta evidencia fue levantada por el Inspector Sandoval.

Al revisar la segunda baldosa del baño, el testigo encontró cannabis sativa y pasta base consistente en una bolsa de nylon negra conteniendo bolsas transparentes con cannabis de alrededor de 1.700 gramos, paquetes envueltos con más de 1.000

envoltorios, y cocaína base de 2,5 kilogramos dosificada en 12.608 papeles cuadriculados, forma habitual de comercialización de esta sustancia.

El funcionario describió que el inmueble contaba con dos vías de acceso, correspondiendo la utilizada por Carlos Ponce a un portón de madera, precisando que desde el interior de su dependencia no había acceso a las demás dependencias del inmueble. Señaló que Ariel Reyes se encontraba en la edificación secundaria, mientras que Carlos Ponce ocupaba una habitación muy pequeña destinada aparentemente para almacenar herramientas, contigua al dormitorio donde fue hallado.

El declarante confirmó que en la habitación pequeña se encontraba únicamente Carlos Ponce al momento del procedimiento.

Durante el contraexamen de la defensa, el testigo aclaró que las herramientas encontradas correspondían a implementos de uso diario, sin que existieran indicios de que estuvieran remodelando el domicilio. Preciso que en la edificación trasera había más personas, pero que no se tenía acceso a esa zona desde la habitación del imputado, confirmando que allí había tres personas más, mientras el imputado se encontraba solo en la parte delantera del inmueble.

Finalmente, prestó declaración el Inspector de la Policía de Investigaciones de la BICRIM Peñalolén **Jairo Giovanny Flores Flores**, quien señaló ser integrante de la Agrupación “Microtráfico 0”, que investiga delitos de tráfico y control de armas, declaró haber participado en la investigación dirigida contra Carlos Ponce, apodado “El Pirata Cojo”, iniciada a fines de marzo y comienzos de abril de 2021 bajo la dirección del fiscal Ernesto Navarro.

El testigo explicó que tomaron conocimiento de múltiples hechos de violencia ocurridos en Peñalolén, específicamente en el sector de La Faena y Villa Lo Arrieta, por delitos violentos asociados al tráfico y microtráfico e infracciones a la ley de armas, materializados por el sujeto denominado “El Pirata Cojo”. A partir

del levantamiento de información, lograron recopilar al menos 16 denuncias entre "Denuncia Seguro" de Prevención del Delito y denuncias municipales, las cuales señalaban que el delito de tráfico era ejecutado por Carlos Ponce en el domicilio de calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén.

El testigo informó que al investigar los antecedentes de Carlos Ponce, constataron que tenía condenas anteriores por delitos violentos, homicidio e infracciones a la ley de armas, registrando domicilio en un lugar distinto al investigado. Se gestionó la designación de Marcel Parra Sepúlveda como agente encubierto revelador, quien el 6 de abril de 2021 concurrió al domicilio del sujeto y logró adquirir dos papelines de droga, venta realizada por otro sujeto distinto a Ponce.

Indicó que el 20 de abril de 2021 se realizaron vigilancias hacia el domicilio sin poder establecer que el sujeto estuviera en el inmueble. El declarante, junto a Ignacio Sandoval Álvarez, concurrió a domicilios asociados a familiares del investigado, específicamente al domicilio de pasaje Maqui (domicilio de la suegra), donde se encontraba estacionada la camioneta marca Nissan X-Trail roja. Simultáneamente, el resto del equipo integrado por el Inspector Parra se mantuvo realizando vigilancias, logrando apreciar sujetos que concurrían al inmueble de calle 114 N° 1045, realizaban intercambios de elementos pequeños y luego se retiraban.

Precisó que el 29 de abril de 2021, bajo el monitoreo de dron a cargo del Subinspector Ignacio Sandoval, se iniciaron las vigilancias del domicilio investigado, estableciéndose dos vehículos de control. Se seleccionaron dos personas para efectuar control de identidad: Lilian Adasme, quien fue controlada por el declarante y portaba cinco envoltorios de papel blanco con sustancia en polvo de cocaína base, y una segunda persona también con envoltorios de pasta base.

Posteriormente, el testigo fue designado como agente encubierto, concurriendo al lugar acompañado del Inspector Parra, quien lo dejó a una cuadra

del inmueble. Al llegar, observó a Carlos Ponce sentado en sillas plásticas acompañado de dos sujetos más. Le solicitó la venta de "5 vicios", momento en que Ponce extrajo desde un contenedor cinco envoltorios, recibiendo a cambio \$5.000 pesos. El declarante precisó que el domicilio mantenía en su fachada un local de venta de comida rápida con un cobertizo en el frontis que utilizaba parte de la vereda, bajo el cual se ubicaban sillas y mesas para la supuesta atención de comida. En uno de los costados del local se encontraba un letrero que decía "El Pirata Cojo".

Declaró que una vez completada la transacción y retirado del lugar, se realizó la prueba de campo que arrojó resultado positivo para cocaína base. El testigo identificó categóricamente al acusado presente en el tribunal como la persona que le vendió la droga.

Complementando la declaración judicial el Ministerio Público incorporó el acta de recepción de droga N° 4348-202, correspondientes a 5 papelillos de presunta cocaína, equivalentes a 0,8 gr. bruto, que de acuerdo al protocolo de análisis químico NUE 6329482 corresponde a cocaína en porcentaje no inferior al 5%.

El funcionario participó en las gestiones para obtener autorización de entrada y registro de los domicilios de calle Tobalaba, Maqui, Ucayali y calle 83. El 15 de marzo de 2022, mientras transitaba con el Subcomisario Díaz, observaron que la camioneta investigada doblaba hacia calle 83 N° 1472, población La Faena, manteniéndose por corto tiempo e ingresando al domicilio para retirarse rápidamente del lugar, identificando a Carlos Ponce como copiloto.

El declarante destacó que en el domicilio de calle 83 se encontró la mayor cantidad de evidencia: al menos 12.000 envoltorios de papel blanco cuadriculado, armas de fuego, municiones, además de estar presente el imputado Carlos Ponce. Al testigo le correspondió ingresar al domicilio de Ucayali, donde no se encontró evidencia.

Refirió que en el año 2023 se le solicitó realizar un levantamiento patrimonial de los inmuebles de Carlos Ponce y su pareja. Durante noviembre de 2022 se volvió a realizar entrada al domicilio de calle 114 N° 1045, donde se detuvo a Tihare Espinoza, encontrándose 860 gramos de clorhidrato de cocaína, 250 gramos de cocaína base y cannabis.

El testigo declaró haber realizado un levantamiento en el Conservador de Bienes Raíces del domicilio de calle 114 N° 1045, estableciendo que estaba asociado a tres hermanos: Luis, Ricardo y Heraldo Meneses Torres, siendo la causante la madre de estos, doña Blanca Torres. Tomó contacto con Heraldo Meneses Torres, quien declaró haber estado mucho tiempo sin vivir en el domicilio, pero que desde hace ocho años había vuelto al inmueble. Al retornar, el único heredero que vivía allí era Luis Araya Torres.

Indicó que don Heraldo Meneses Torres declaró que el domicilio estaba deteriorado y habitado por múltiples personas, encontrándose él y Luis inmersos en la drogadicción y alcoholismo, que conocía a Carlos Ponce cuando se dedicaba a la venta de drogas en otro lugar de La Faena, en calle Nebraska. Según el relato de aquél, Carlos Ponce y Tihare Espinoza le ofrecieron comprar el domicilio, aceptando Heraldo y convenciendo también a su hermano Luis. En una fecha no recordada concurrieron con Tihare a una notaría donde Heraldo y Luis firmaron la cesión de derechos hereditarios.

Informó el testigo que Heraldo Meneses Torres declaró que nunca recibió los \$7.000.000 acordados, pero que a cambio Tihare y Carlos le entregaron dosis de cocaína base, calculando que a esa fecha había recibido \$2.000.000 en drogas. También mencionó un segundo inmueble ubicado en Viña del Mar, Guacolda 64, lote 806, cedido bajo las mismas circunstancias por Tihare bajo promesa de pago.

Agregó el funcionario que no fue posible contactar a Luis porque había fallecido años previos. Al trasladarse a Viña del Mar buscando a los herederos de

Luis, tomaron declaración a cuatro de sus hijos, quienes señalaron no tener contacto con su padre desde hace más de siete años y que solo con la presencia policial se enteraron de su muerte. Finalmente, contactaron a Ricardo, quien se mantenía en Barcelona, España, manifestando que el domicilio estaba abandonado, que solo vivía Luis, que no conocía a los imputados y que desde 2015 no había viajado a Chile, por lo que no había firmado ni cedido los derechos de la herencia.

El testigo precisó que realizó búsquedas en el SII por los años tributarios de Carlos Ponce y su pareja. Respecto a Carlos Ponce: en 2021 no registró inicio de actividades, y en 2022 registró pago de remuneraciones por marzo, abril y junio por \$154.000 en total. Respecto a Tihare: en 2021 realizó la inscripción de la empresa "Tihare Espinoza Comida" con giro de comida rápida, registrando el mismo año el término del giro sin mantener ingresos. En 2022 registró la venta de un vehículo marca BYD 2012 por \$2.300.000 y la compra de un Station Wagon Nissan X-Trail rojo PHVS37 con avalúo de \$21.999.990.

El declarante concluyó que la falta de actividades remuneradas lícitas llevó a estos sujetos a realizar actividades simuladas, y que la adquisición de los inmuebles no fue registrada en el CBR para evitar alertar a las entidades respectivas, apreciándose en todo momento uso y goce de los inmuebles actuando como dueños.

Durante el contraexamen de la defensa, el testigo aclaró que no participó en diligencias en el domicilio de pasaje 106 con 107, ni supo que se realizara algún allanamiento en ese lugar. Confirmó que el domicilio de la madre de Tihare estaba en calle Afluente y pasaje Maqui, y que cuando encontraron la camioneta allí estaba estacionada sin ver a Carlos Ponce en ese momento.

Precisó que los seguimientos con dron se realizaron aproximadamente a las 19:00 horas, que generalmente el local comercial estaba cerrado, y que las personas seleccionadas llegaban al lugar, permanecían pocos segundos, interactuaban con

personas que vivían en el lugar y luego se iban. Cuando actuó como agente revelador fue cerca de las 15:00 horas, encontrando el local cerrado pero con las sillas frente al local donde estaba Carlos Ponce junto a dos sujetos no identificados.

Finalmente, el testigo confirmó que Heraldo nunca recibió dinero de parte de Tihare ni Carlos, que respecto a los dos inmuebles no se concretó el traspaso porque faltaba un heredero, y que durante los ocho meses desde el inicio del negocio hasta su cierre, el local comercial no registró actividad alguna, tratándose de conductas destinadas a hacer uso y goce como dueños evitando la fiscalización mediante la omisión de las inscripciones respectivas.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, a partir de los dichos de los efectivos policiales relatados en el considerando precedente se acreditó, en virtud de una investigación originada en marzo de 2021 a partir de una declaración acogida al artículo 22 de la Ley N° 20.000, complementada con numerosas denuncias ciudadanas y municipales coincidentes en su tenor, que el acusado se dedicaba al tráfico de drogas en pequeñas cantidades utilizando como fachada un local de comida rápida denominado "El Pirata Cojo", ubicado en calle 114 N° 1045, en la comuna de Peñalolén.

Así, el 6 de abril de 2021 se llevó a cabo la primera técnica de agente revelador a cargo del Inspector Marcel Parra Sepúlveda, quien constató que efectivamente funcionaba un local de comida rápida, pero al consultar por Carlos Ponce y solicitar drogas, le confirmaron que podían venderle estupefacientes, evidenciando la actividad ilícita paralela. De esta manera, a partir del 26 de abril de 2021 se iniciaron vigilancias sistemáticas utilizando diversos medios técnicos. El 29 de abril de 2021, durante estas vigilancias, fueron controlados múltiples compradores que confirmaron haber adquirido drogas en el local: Alejandro Sánchez (quien portaba dos envoltorios de cocaína base), una mujer no identificada (cinco envoltorios de cocaína base), Lilian Adasme (cinco envoltorios de cocaína base) y Manuel Gaete (dos envoltorios de

cocaína base), todos los cuales declararon haber sido atendidos por colaboradores del acusado.

En el mismo sentido anterior, se pudo establecer que el 6 de junio de 2021 se ejecutó una segunda técnica de agente revelador a cargo del funcionario Jairo Flores, quien fue atendido directamente por Carlos Ponce Vásquez, estableciéndose así de manera inequívoca su participación personal en la venta de estupefacientes, al adquirir cinco envoltorios de cocaína base por la suma de \$5.000.

Por otra parte logró identificarse una red de domicilios donde el acusado interactuaba y que incluía: su residencia en Avenida Tobalaba con Departamental, los domicilios de familiares en pasaje Ucayali y pasaje Maqui, el local comercial de venta en calle 114, y especialmente el domicilio de pasaje 83 N° 1472, población La Faena, utilizado este último como centro de acopio, según información de vecinos y las vigilancias policiales.

De esta forma, el 17 de marzo de 2022 se materializaron las entradas y registros simultáneas en todos los domicilios identificados, procedimiento que arrojó evidencia contundente de la magnitud de la organización criminal de la cual el acusado era partícipe.

En particular, respecto del domicilio de pasaje 83 N° 1472, Población La Faena, donde fue hallado el acusado Carlos Ponce, acostado en una habitación, fue el sitio en que se incautó la mayor cantidad de evidencia, toda vez que en un velador contiguo a la cama, fue posible ubicar una balanza digital, 30 gramos de cannabis sativa y 279 envoltorios de cocaína base; en tanto que bajo cerámicas removibles del baño, se encontraron más de 12.000 envoltorios de cocaína base listos para su comercialización, con un peso de 2,542 kilogramos; cuatro armas de fuego: revólver marca Galand calibre 12; un arma de fuego tipo derringer, dos cañones Davius Industries modelo D-22 calibre .22; un revolver Smith & Wesson calibre .38; un revolver marca Colt .38; abundante munición: 100 cartuchos 9mm, 50 cartuchos .32 auto, 50 cartuchos .22

largo, 17 cartuchos .38 corto, 10 cartuchos .38 especial; 1 cartucho balístico calibre 10mm; 4 municiones .44 win ; 1 cartucho balístico .40mm, 1 cartucho balístico .38 auto; además de 1,79 kilogramos adicionales de cannabis sativa.

En el mismo sentido anterior las actas de recepción de droga incorporadas bajo los NUE 6329825 y 6329828, correspondientes al material incautado el 17 de marzo de 2022 en el domicilio de pasaje 83, corroboran plenamente los testimonios policiales y certifican la autenticidad de los estupefacientes y armamento hallados en posesión del acusado.

En consecuencia, la prueba testimonial y documental analizada establece de manera categórica e inequívoca que Carlos Ponce Vásquez participaba de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes de considerable magnitud, utilizando múltiples domicilios y colaboradores, manteniendo un arsenal de armas de fuego y grandes cantidades de drogas listas para su comercialización.

La progresión cronológica de los hechos, desde las primeras denuncias hasta el hallazgo de más de 12.000 dosis individuales de cocaína base en su poder directo, junto con el armamento incautado, demuestra una actividad criminal sistemática, organizada y de alta peligrosidad social.

Por lo anterior, el Tribunal tiene por acreditada los hallazgos de droga y de utensilios destinados a cometer el delito de tráfico de drogas, en los mismos términos que fueron descritos en la acusación.

A su vez, la *naturaleza, peso y, en su caso, el grado de pureza de la droga* incautada y que fue hallada en posesión del acusado, se precisó con la documental incorporada por el fiscal.

En efecto, del Acta de Recepción 4348-2021, de 9 de junio de 2021, emanada del Servicio de Salud Metropolitano Oriente; del Protocolo de análisis químico de la NUE 6329482, dan cuenta que esta evidencia corresponde a 5 papelillos de cocaína en concentración no inferior al 5 % de 0,8 gr. peso bruto. Asimismo, del Acta de

Recepción N° 191 de 18 de marzo de 2022 correspondiente a la NUE 6329827 y el Protocolo de análisis e informe de droga de 04 de abril de 2022, arrojó que la sustancia incautada corresponde a cannabis sativa, con un peso bruto de 1783 gr., junto a su respectivo informe de peligrosidad. Por su parte, el acta de recepción N° 190 de fecha 18 de marzo de 2022, da cuenta de la NUE N° 6329824, correspondiente a cannabis sativa con un peso bruto de 30,9 gramos, junto a sus respectivos informes de peligrosidad. En tanto, del acta de recepción 1899-2022 de 18 de marzo de 2022, se advierten las muestras 6 y 7, que corresponden a “M6:1 bolsa con 279 papelillos de un peso bruto de 55,4 gr. de la que se abren 43 para obtener la muestra quedando 65 como contra muestra y un saldo de 171 papelillos a destruir, M7: 4 bolsas con un total de 12.329 papelillos con un peso bruto de 2480 gr. del que se abren 92 para obtener la muestra y contra muestra, quedando un saldo de 12.237 papelillos a destruir”, las que de conformidad con el protocolo de análisis químico de la NUE 6329825 y NUE 6329828 corresponden a cocaína base a un 69% y 67%, respectivamente.

La circunstancia de ser la sustancia examinada la misma que fue decomisada por los efectivos policiales, se desprendió de las respectivas cadenas de custodia - también incorporadas- al momento de la exhibición de la evidencia material a algunos de los declarantes.

Por último, para dar por acreditada la acción dañina de la cocaína base, los sentenciadores tuvieron en cuenta los informes emanados del Instituto de Salud Pública, suscrito por el perito químico René Rocha Barrasa conforme a los cuales dicha sustancia puede producir, entre otros, complicaciones cardiovasculares, arritmias, convulsiones y coma, entre otros efectos nocivos.

A su vez, para dar por acreditados los peligros para la salud pública de la cannabis sativa, se tuvo en consideración los informes respectivos elaborados por la perito Fernanda Astudillo Domínguez, bioquímico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en los cuales se indicó que el perjuicio causado al individuo

por el abuso de la cannabis puede adoptar las siguientes formas: deterioro de la memoria, aceleración de la pérdida de neuronas asociadas al envejecimiento, disminución de la capacidad de aprendizaje, además de indicar que el consumo crónico puede generar efectos endocrinos, como disminución de la testosterona, además de poder generar síndrome de abstinencia, entre otros efectos nocivos. El mal que causa a la sociedad el uso indebido de la cannabis radica en las consecuencias económicas del menoscabo de la funciones sociales del individuo y en su propensión acentuada a un comportamiento social y antisocial.

DÉCIMO CUARTO: Que los supuestos fácticos establecidos en el considerando anterior constituyen el delito de *tráfico ilícito de estupefacientes* en la medida que el agente fue sorprendido manteniendo en su poder la cocaína base y la marihuana antes mencionada, las que alcanzaron pesos brutos de 2.535,4 gramos para la primera sustancia y de 1813,9 gramos para la segunda de ellas, sin perjuicio, además, de los 0,8 gr de cocaína base vendida al agente revelador por el acusado en junio de 2021.

Así las cosas, la cantidad total de droga incautada al sujeto activo permitió concluir que su despliegue encuadra en la figura típica por la cual se dedujo la acusación.

DÉCIMO QUINTO: Que, la participación del acusado en el delito en comento se estableció con el reconocimiento categórico que de su persona efectuaron los funcionarios policiales que declararon en el juicio, quienes lo sindicaron como uno de los sujetos detenidos a raíz de estos hechos. En concreto, el inspector Jairo Flores lo señaló como el sujeto que le vendió las 5 papelines de cocaína base, el 06 de junio de 2021, cuando el oficial actuó como agente revelador; en tanto que el oficial Marcel Parra lo reconoció como el sujeto de interés de la investigación desarrollada, además de ser la persona que fue hallada en el domicilio de calle 83, a la fecha de irrupción en el mismo el 17 de marzo de 2022. Por su parte, los demás funcionarios deponentes lo reconocieron como el agente investigado y, en particular, el inspector Ignacio Sandoval

Alvarez lo reconoció como el sujeto que fue habido en el domicilio de calle 83 N° 1472 en posesión de las drogas descritas en los considerandos que anteceden.

A partir de tales sindicaciones se concluyó que Carlos Eduardo Ponce Vásquez intervino de una manera inmediata y directa en la ejecución del hecho que se le atribuyó, por lo que se le consideró autor del mismo.

C.- EN CUANTO AL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO Y DE MUNICIONES, Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA.

DÉCIMO SEXTO: Que, para establecer los hechos ya consignados en el motivo sexto en relación con este delito, el Tribunal también tuvo en consideración lo expuesto por los mismos funcionarios de la Policía de Investigaciones ya mencionados, los inspectores Ignacio Sandoval Álvarez y Yerhal Ignacio Acuña Zapata, los que expusieron que a raíz del procedimiento por drogas analizado en los acápites precedentes, procedieron al registro del inmueble ubicado en calle 83 N° 1472, población La Faena, comuna de Peñalolén, donde al interior de una baldosa del baño contiguo a la habitación en que fue hallado el acusado se encontraron armas envueltas en pañales y enguinchadas, además de numerosas municiones de diverso calibre, correspondientes específicamente a: un revolver marca Galand& Sommerville, calibre 12 mm; un arma de fuego tipo derringer, de dos cañones marca Davius industries, modelo D-22 calibre .22 LR número de serie 543253 con dos cartuchos en su interior; un revolver Smith & Wesson con cinco cartuchos, calibre .38 número de serie 329764; un revolver Colt con 6 cartuchos .38 spl número de serie 9121003; además de 100 municiones 9 mm; 50 municiones calibre .32 auto; 50 cartuchos balísticos de diferentes marcas calibre .22 LR; 17 cartuchos balísticos marca CBC calibre .38 corto; 10 cartuchos balísticos calibre .38 SPL; 1 cartucho balístico calibre 10 mm; 4 municiones .44 win; 1 cartucho balístico .40 mm, 1 cartucho balístico .38 auto.

Al serle exhibida al oficial Ignacio Sandoval Alvarez, la fotografía N° 9 del set de 64 imágenes del Informe policial N° 1175, reconoció las armas de fuego y municiones de distintos calibres que se encontraban envueltas en pañales y enguinchadas, ocultas en el forado de las baldosas removibles y libres de fragüe.

Los dichos precedentes resultaron concordantes con los asertos del perito *Roberto Jimenez Silva*, quien dijo haber elaborado el informe pericial balístico 1269/2022 de 30 de diciembre de 2022, declarando haber recibido mediante oficio N° 131 diversas armas de fuego y municiones incautadas al acusado, las que se encontraban debidamente selladas, rotuladas y con su respectiva cadena de custodia bajo los NUE 6329790, 6329791 y 6329798, evacuando posteriormente el informe pericial balístico N° 1269.

El perito determinó que las armas incautadas consistían en: un revolver Davis Industries calibre .22 modelo D-22 de fabricación estadounidense con dos cañones capaz de cargar dos cartuchos de igual calibre; un revolver Smith and Wesson calibre .38 corto; un revolver Colt modelo Police calibre .38 especial; un revolver Galand Somersville calibre 12 mm de fabricación belga; un revolver FAMAE calibre .32 corto; y una subametralladora ECold modelo ASI de 9mm, esta última diseñada exclusivamente para cartuchos de foguero y, por tanto, no apta como arma de fuego. Respecto de la funcionalidad de las armas, el experto concluyó que el revolver Galand Somersville, debido a su antigüedad, no fue sometido a prueba de funcionamiento, pero por su buen estado de conservación se infiere apto para su uso, mientras que los revólveres Smith and Wesson calibre .38 corto, Colt .38 especial y FAMAE calibre .32 corto quedó demostrado que se encontraban aptos para el uso tras las correspondientes pruebas. En cuanto a las municiones halladas, que incluían 97 cartuchos calibre .22 long rifle, 98 cartuchos calibre .32 auto, 16 cartuchos .38 especial, 1 cartucho calibre 10 mm, 100 cartuchos 9x19 mm, 3 cartuchos .44.40, 1 cartucho .44 Remington Magnum y 1 cartucho .40 auto, el perito estableció que los cartuchos .38

especial, .32 auto, .22 long rifle y .40 auto se encontraban aptos para el disparo tras realizarse las debidas pruebas de funcionamiento, precisando que existía compatibilidad entre las armas y parte de la munición incautada, específicamente que los cartuchos .22 long rifle eran compatibles con el revolver Davis Industrias, los cartuchos .32 auto podían ser disparados por el revolver FAMAE, mientras que resultaban incompatibles con las armas halladas los cartuchos 9x19 mm, .44.40, .44 Remington Magnum, 10 mm y .38 ACP.

La evidencia pericial, corroborada mediante 44 fotografías del informe balístico que muestran detalladamente cada arma y munición analizada, establece de manera categórica que el acusado mantenía en su poder cuatro armas de fuego, respecto de tres de las cuales se pudo acreditar que se encontraban aptas para el disparo, sin contar con la respectiva inscripción ni autorización legal, de acuerdo al Informe N° 6442/1902/2022, emitido por la Dirección General de Movilización (DGMN) con fecha 11 de mayo del año 2022, respecto de Carlos Eduardo Ponce Vasquez, configurándose así los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones contemplados en el artículo 9° de la Ley N° 17.798, en los cuales ha tenido participación directa el acusado en calidad de autor.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en consecuencia, los supuestos fácticos establecidos en el motivo noveno de esta sentencia configuran también el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, toda vez que se probó en el juicio que el agente mantenía en su poder tres revólveres aptos para ser empleados como armas de fuego, sin contar para ello con el permiso emanado de la autoridad competente.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por el contrario, no se acreditó la configuración del ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida consignado en la acusación, por cuanto, del mérito de la propia prueba fiscal, en particular, de la declaración del perito armero, surge que el antecedente relativo a que el revólver Galand

Somersville, carecía de número de serie, fue desvirtuado por el experto, quien al serle exhibido el set de 44 fotografías del informe pericial balístico, refirió respecto de la imagen N° 17 que esta correspondía al número de serie del arma ante exhibida, que correspondía al revolver Galand Somersville, calibre 12 mm., quedando de esa manera, descartada la hipótesis del tipo penal del artículo 3 de la ley 17.798.

D.- EN CUANTO AL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:

DÉCIMO NOVENO: Que el delito en cuestión se encuentra previsto y sancionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, que señala, en lo que atañe al presente juicio que:

“a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que proviene directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de algunos de los delitos contemplados en la Ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley 18.314.....; o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes. b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito. Se aplicará la misma pena..... Para los efectos de este artículo se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos....”

Al respecto se puede sostener que dicho ilícito surge como resultado de la necesidad de sancionar el fin último de los infractores de ley que pretenden incorporar al sistema comercial legal, los dineros resultantes de la comisión de delitos, especialmente vinculados a ámbitos muy lucrativos como el caso del tráfico de drogas, comercio de armas o terrorismo. Por ello para configurar el delito de lavado de activos se requiere la existencia de un “delito base” del cual provengan “los dineros” que se desea legitimar. Es así como la ley 19.913, que tipifica las conductas constitutivas del ilícito analizado, lo vincula a las figuras de tráfico ilícito de estupefacientes, conductas terroristas, infracciones a la ley de armas, y otras

normas relativas a determinados delitos financieros, pornográficos, de secuestro y prostitución. etc.

Por otra parte, tratándose del supuesto contemplado en la letra b) de la norma antes citada, la Excelentísima Corte Suprema ha entendido que dicho precepto *“no sanciona a quienes hayan realizado la actividad ilícita de tráfico, sino que está encaminada a castigar a terceros, que adquieran, posean, tengan o usen los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos han conocido su origen ilícito. La redacción sugiere, entonces, que el tercero – que no cometió el ilícito – usa esos bienes con ánimo de lucro, si al momento recibirlos, sabía de su origen ilícito.* Lo anterior, se explica conforme a lo dispuesto en los incisos 4° y 5° de la misma norma, en cuanto el primero de ellos sanciona a quien haya cometido alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) sin conocer el origen de los bienes por negligencia inexcusable; en tanto que el inciso 5° plantea el supuesto de que quien haya participado *“como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será sancionado...”*, norma que únicamente podría remitirse, en este caso, a la hipótesis de la letra a), de acuerdo a lo que se ha explicado. (Rol N° 25.463-2024 CS)

VIGÉSIMO: Que, conforme lo ha sostenido la doctrina, el delito en comento contempla a lo menos tres etapas de ejecución, a saber, la de colocación, que implica la introducción de las sumas de dinero provenientes de la actividad ilícita al mercado financiero, sin ocultar necesariamente la identidad de los titulares; la de estratificación, que consiste en la realización de operaciones financieras que permitan desvincular la identidad de quien cometió el delito base, de la identidad de la persona que realiza la transacción y finalmente la de integración, fase final de la operación en la que se produce reintroducción de los dineros dentro de la economía. Así, el delito de lavado de activos, conocido también como de blanqueo de capitales, se puede definir como *“aquellas actividades tendientes a ocultar o disfrazar la identidad de los*

fondos obtenidos de manera ilegal para darles una apariencia lícita. Así este resulta ser un proceso mediante el cual se integran al sistema financiero y económico los fondos obtenidos ilícitamente bajo la apariencia de licitud en su origen”.

De esta manera, y de acuerdo a lo expuesto en este y el considerando precedente, la única hipótesis probable de configuración respecto de una participación culpable del acusado en el delito de lavado de activos, podría ser aquella que se regula en la letra a) del artículo 27 de la Ley 19.913, debiendo necesariamente acreditarse los presupuestos y elementos materiales que den cuenta de ocultamiento ya sea del origen ilícito o de los bienes adquiridos con el producto o los efectos del delito base, esto es, del tráfico de drogas, debiendo, para tal efecto, establecerse primeramente que el acusado obtuvo dineros o activos de dicha actividad ilícita y que con ello procedió al ocultamiento posterior antes referido.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que de acuerdo al mérito de la prueba rendida en juicio y, en particular, de la declaración del oficial a cargo de la indagatoria del ilícito en análisis, inspector Jairo Flores Flores, además de la documental consistente en las copias de escrituras públicas de cesión de derecho hereditarios efectuada por Luis Araya Torres a Carlos Ponce Vásquez, respecto del inmueble de calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén y del inmueble de calle Guacolda N° 64 lote 806 Sector Agua Santa, comuna de Viña del mar, es posible concluir que no se configuran los presupuestos fácticos de ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 27 de la Ley 19.913.

Lo anterior, atendido que según los dichos del oficial, si bien el acusado concurrió junto a su expareja Tihare Espinoza y los cedentes ante la Notaría de Santiago de doña Dora Silva Letelier para el otorgamiento de las respectivas escrituras de cesión de derechos hereditarios, el acusado no pagó suma de dinero alguna a los cedentes, sino que la contraprestación a dicha cesión de derechos se habría llevado a cabo mediante la entrega de dosis de droga en favor de Heraldo

Meneses Torres, uno de los cedentes, ya que su hermano Luis Araya Torres falleció sin tampoco recibir dinero alguno por dicha cesión.

De esta manera, si bien ha quedado establecido en juicio la existencia de un delito de tráfico de drogas, ocurre que no fue posible establecer que el acusado contara con dinero derivado de aquel ilícito para obtener el incremento patrimonial que significó la adquisición de los derechos hereditarios que le fueron cedidos, sino que únicamente habría utilizado el propio objeto del delito de tráfico para dicha adquisición, lo que tampoco pudo ser fehacientemente acreditado, toda vez que los cedentes de los aludidos derechos hereditarios no comparecieron en juicio para prestar su declaración, habiendo, además, fallecido el cedente Luis Araya Torres, resultando imposible contrastar dicha información con su propio testimonio.

Asimismo, y si bien, el ente persecutor dio cuenta que el acusado no contaba con ingresos formales ni que desempeñara una actividad remunerada, lo cierto es que tampoco logró demostrar que Ponce Vásquez tuviera o hubiese tenido a su disposición la suma de \$7.000.000 para efectuar el pago de la respectiva cesión de derechos, de modo que, al no establecerse la existencia de una suma de dinero suficiente en poder de aquél, tampoco es posible configurar el presupuesto básico de este tipo penal, cual es precisamente la existencia de activos cuyo origen o su propia existencia material se pretenda ocultar.

En este caso, únicamente se está frente a la hipótesis de un traspaso de derechos que no tuvo contraprestación pecuniaria alguna, sino que la misma se habría satisfecho mediante la entrega del propio objeto ilícito del delito de tráfico de drogas.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, no logró acreditarse la configuración del tipo penal del artículo 27 de la Ley N° 19.913 y tampoco que el acusado haya tenido una participación punible en esta cuarta imputación, según se razonó en los motivos que anteceden, y como nadie puede ser condenado por delito

sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley, cuestión esta última que en la especie no ocurrió, Carlos Eduardo Ponce Vásquez fue absuelto de la acusación deducida en su contra por este capítulo.

E.- AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 343 INCISO FINAL DEL CODIGO PROCESAL PENAL.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, una vez comunicada la decisión de condena, en la audiencia prevista al efecto, el fiscal incorporó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, del cual dio a conocer ocho condenas previas, por delitos de diversa naturaleza. Haciendo presente, además, que no concurre respecto al acusado atenuante alguna.

Por otra parte, el persecutor solicitó el comiso de los derechos hereditarios cedidos al acusado en relación a la propiedad de calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén y la de calle Guacolda N° 64, lote 806, sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en la misma oportunidad, el defensor pidió que en la determinación de las penas a su representado, se imponga a éste el mínimo del rango legal por cada delito que se dio por establecido y por acreditada la participación culpable del acusado.

Asimismo, pidió la rebaja de la multa al mínimo de 1 UTM, por encontrarse privado de libertad su representado desde el 17 de marzo de 2022, y no contar con ingresos, además de la exención del pago de las costas.

Por último, se opuso a la solicitud del comiso de los derechos hereditarios, requerido por el Ministerio Público, atendida la decisión de absolución respecto del delito de lavado de activos.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, a la fecha de los hechos, la pena asignada al delito de homicidio simple constaba de un grado de una divisible, presidio mayor en su grado medio. Como el delito se encuentra frustrado y el acusado intervino en calidad de autor, se le debe imponer la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley, de forma tal que esta queda en presidio mayor en su grado mínimo.

Ahora bien, a efectos de determinar la sanción en este caso concreto, el tribunal tiene presente que no favorece al encausado circunstancia atenuante o agravante alguna, de forma que puede recorrer el rango de la pena en toda su extensión, considerando especialmente para la cuantificación de la pena las circunstancias de comisión del delito y la extensión del mal causado.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, constando la pena asignada al delito de tráfico ilícito de drogas de dos grados de una divisible, presidio mayor en su grado mínimo a medio y no afectándole al encausado circunstancias agravantes y/o atenuantes, puede recorrer la pena en toda su extensión, y para efectos de determinar la cuantía de la misma, se atenderá especialmente a la cantidad y diversidad de droga que fue hallada en posesión del acusado al momento de su detención.

En ese contexto, se le impondrá la sanción en el grado mínimo por estimarla atendida más acorde a la extensión del mal causado y a las particularidades del caso.

En cuanto a la solicitud de rebaja de multa, teniendo especialmente presente que el acusado se encuentra privado de libertad desde hace más de tres años a la fecha, lo que hace presumir fundadamente su carencia de medios económicos, se accederá a la rebaja de ésta, así como a la exención de las costas de la causa, por haber sido representado el imputado por la Defensoría Penal Pública.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que la pena asignada al delito de tenencia ilegal de arma de fuego prevista en los artículos 2 y 9 de la Ley 17.798, es la de presidio menor en su grado máximo, y concurriendo la agravante del artículo 12 de la misma

ley, al haber sido halladas más de dos armas en poder del acusado, sin que le favorezcan atenuantes, se impondrá la pena superior en un grado a la contemplada en el referido artículo 9, determinándose su quantum en razón de la mayor extensión del mal causado por el número de armas, lo que se indicará en lo resolutivo del fallo.

Por su parte, la pena asignada al delito de tenencia de municiones, según el mismo artículo 9, corresponde a presidio menor en su grado medio, de modo que teniendo en cuenta la ausencia de atenuantes y/ agravantes, para la determinación de la cuantía respectiva podrá recorrerse la misma en toda su extensión, y se tendrá en especial consideración, la cantidad de municiones encontradas por el personal policial, así como la diversidad de las mismas.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, toda pena que se imponga por un crimen o simple delito lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó, a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del crimen o simple delito, y, que, en materia de la Ley de Drogas, en especial deben caer en comiso, entre otros, los dineros y, en general todo otro instrumento que haya servido o haya estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en dicha Ley, los efectos que de ella provengan y las utilidades que hubiera originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica, misma sanción que se aplicará a las materias primas, elementos, materiales, equipos e instrumentos usados o destinados a ser utilizados, en cualquier forma para cometer alguno de los delitos sancionados en el mencionado cuerpo normativo.

Al respecto, cabe recordar que a raíz del procedimiento que dio origen al enjuiciamiento de autos, los detectives incautaron directamente al acusado los contenedores de drogas y evidencias materiales mencionadas en la acusación, así como las armas y municiones halladas en el domicilio de calle 83 N° 1472, de la

comuna de Peñalolén, y atendida la innegable vinculación de dichas pertenencias con el delito que nos convoca, se ordenará el comiso de tales evidencias.

Sin perjuicio, de que se acreditó también el comiso de las demás sumas de dinero, contenedores de drogas y las otras evidencias mencionados en la acusación, ellos fueron encontrados en poder de los otros sujetos dedicados al tráfico de drogas y en el inmueble de calle 114 N° 1045, Peñalolén, en que se produjo el allanamiento simultaneo del día 17 de marzo de 2022. Conforme a ello, y teniendo en cuenta que los individuos que resultaron allí detenidos, ya fueron condenados por estos mismos hechos, el comiso no se extenderá a las demás especies y dineros mencionados en la acusación, en el entendido de que las diversas sentencias previas ya debieron haberse pronunciado sobre el punto en cada uno de los respectivos casos, al no haberse aportado información alguna en sentido contrario.

Por otra parte, sin perjuicio de no acreditarse la configuración del ilícito de lavado de activos y de haberse obtenido la cesión de derechos hereditarios por el acusado Ponce Vásquez respecto de los inmuebles de calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén y Guacolda N°64 , Lote 806, sector Agua Santa, Viña del Mar -según el testimonio policial- mediante la contraprestación de droga, sin perjuicio de no encontrarse aquella situación ratificada en juicio por los cedentes de tales derechos, lo cierto es que la defensa del acusado tampoco logró acreditar que éste hubiera empleado un mecanismo lícito de pago de aquella cesión de derechos, resultando contrario a la lógica, a las máximas de la experiencia y a la propia prueba rendida en autos que dicha solución se hubiera verificado en la forma referida por el acusado, esto es, mediante pagos parciales e indeterminados en cuanto a sus montos y el tiempo, lo que hace necesariamente presumir de manera fundada que aquella contraprestación adolece de objeto ilícito y deriva de la comisión del delito de tráfico de drogas que en virtud de este fallo se condena, razón por la que se

impondrá igualmente la sanción de comiso de tales derechos en relación al acusado de marras.

VIGESIMO NOVENO: Que, atendida las condenas previas que afectan al encausado y la extensión de la pena privativa de libertad que le será impuesta, no se le concederá pena sustitutiva alguna de las previstas en la ley, por lo que deberá cumplir de manera efectiva las sanciones aplicadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 26, 28, 31, 50, 68, 69 y 391 N° 2 del Código Penal; 1, 3, 45, 46 y 52 de la Ley 20.000; y 1 del Reglamento respectivo; artículos 2 y 9 de la Ley 17.798 sobre Control de Armas; artículo 27 de la Ley 19.913; artículos 45, 47, 295, 296, 297, 340, 342, 343, 344, 346 y 468 y 469 del Código Procesal Penal; **se declara que:**

I.- Se **absuelve** al acusado **CARLOS EDUARDO PONCE VÁSQUEZ**, ya individualizado, de la acusación de ser autor del delito de **Tenencia Ilegal de Arma Prohibida**, por el cual fue acusado en esta causa y que se dijo cometido el 17 de marzo de 2022, en la comuna de Peñalolén.

II.- Se **absuelve** al acusado **CARLOS EDUARDO PONCE VÁSQUEZ**, ya individualizado, de la acusación de ser autor del delito de **Lavado de Activos**, por el cual fue acusado en esta causa y que se dijo cometido el 15 de septiembre de 2021.

III.- Se **condena** al acusado **CARLOS EDUARDO PONCE VÁSQUEZ**, ya individualizado, a la pena de **SIETE años de presidio mayor en su grado mínimo**, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como **autor** del delito de **Homicidio Simple** en grado frustrado, cometido el día 18 de septiembre de 2020 en la comuna de Peñalolén.

IV.- Se **condena** al acusado **CARLOS EDUARDO PONCE VÁSQUEZ**, ya individualizado, a la pena de **OCHO años de presidio mayor en su grado**

mínimo, al pago de una **multa ascendente a diez unidades tributarias mensuales (10 UTM)** y a las **accesorias** de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como **autor** del delito de **Tráfico Ilícito de Estupefacientes, previsto y sancionado en los artículos 1 y 3 de la Ley 20.000, en grado consumado**, cometido el 17 de marzo de 2022, en la comuna de Peñalolén.

V.- Se **condena** al acusado **CARLOS EDUARDO PONCE VÁSQUEZ**, ya individualizado, a la pena de **SIETE años de presidio mayor en su grado mínimo** como **autor** del delito de **Tenencia Ilegal de Arma de Fuego**, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además de la pena de **800 días de presidio menor en su grado máximo** como **autor** del delito de **Tenencia Ilegal de Municiones**, y a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, ambos ilícitos previstos y sancionados en los artículos 2 y 9 de la Ley 17.798, que se encuentran en grado de desarrollo **consumado**, cometidos el 17 de marzo de 2022, en la comuna de Peñalolén.

VI.- Al no cumplir los requisitos de la Ley 18.216 no se concede al sentenciado ninguna de las penas sustitutivas contempladas en dicho cuerpo legal, por lo que cumplirá la pena corporal impuesta de manera efectiva, la que **se le computará desde el 17 de marzo de 2022**, fecha desde la cual de manera ininterrumpida permanece privado de libertad en esta causa.

VII.- Que por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública, se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa.

VIII.- Se ordena el COMISO de los envoltorios contenedores de droga incautados al encausado, debiendo ser destruidos bajo la supervisión del administrador del Tribunal encargado de la ejecución de esta sentencia.

Se dispone, además, el COMISO del revolver marca Galand& Sommerville, calibre 12 mm; el arma de fuego tipo derringer, de dos cañones marca Davius Industries, modelo D-22 calibre .22 LR número de serie 543253 con dos cartuchos en su interior; el revolver Smith & Wesson con cinco cartuchos, calibre .38 número de serie 329764; el revolver colt con 6 cartuchos .38 spl número de serie 9121003; 100 municiones 9 mm; 50 municiones calibre .32 auto; 50 cartuchos balísticos de diferentes marcas calibre .22 LR; 17 cartuchos balísticos marca CBC calibre .38 corto; 10 cartuchos balísticos calibre .38 SPL; 1 cartucho balístico calibre 10 mm; 4 municiones .44 win; 1 cartucho balístico .40 mm, 1 cartucho balístico .38 auto.

Asimismo, se ordena el COMISO de los derechos hereditarios cedidos al sentenciado por don Luis Fernando Araya Torres respecto de los inmuebles de calle 114 N° 1045, comuna de Peñalolén y el de Guacolda N°64 , Lote 806, sector Agua Santa, comuna de Viña del Mar.

IX.- Atendido el delito por el que fue condenado el acusado, ejecutoriada esta sentencia ordénese por el Tribunal de Garantía correspondiente la incorporación de sus huellas genéticas en el Registro de Condenados, si dichas huellas hubieren sido determinadas durante el procedimiento criminal; o, en su defecto, dispóngase la correspondiente toma de muestras biológicas necesarias para dicho fin.

En su oportunidad, ofíciase a los organismos que corresponda para comunicar lo resuelto, infórmese al tenor de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 46 de la Ley 20.000.- y remítase los antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía respectivo, para la ejecución de la pena. En dicha oportunidad, póngase al

sentenciado a disposición del referido Tribunal para los efectos del cumplimiento de la pena.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la juez Grace Díaz Salvo.

RUC 2100264473-5

RIT 77-2025

PRONUNCIADA POR EL SEPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADO POR LOS JUECES ELIZABETH SCHURMANN MARTIN, QUIEN PRESIDIO, GRACE DÍAZ SALVO Y ANGELICA CORTES GODOY, QUIEN CONCURRIÓ A LA DECISIÓN PERO NO FIRMA POR HABER CESADO SU SUPLENCIA EN ESTE TRIBUNAL.